



PLAZA PÚBLICA
periodismo de profundidad

Cambios para no **cambiar**

Lo que queda del gobierno de la esperanza
en el país de la eterna crisis

andrés zepeda

Cambios para no cambiar

Texto: Andrés Zepeda

Un repaso sucinto, no exhaustivo, de los cuatro años del gobierno saliente y una semblanza política y humana de su rostro insignia, Álvaro Colom, y de algunos de sus colaboradores más importantes, a través de amigos, conocidos, detractores, protagonistas y expertos.

Índice

PRÓLOGO: Una noche en un bar	5
PRIMERA PARTE: La ilusión. El gobierno de la esperanza	10
SEGUNDA PARTE: La frustración. El gobierno de la ambigüedad	20
TERCERA PARTE: La decepción. El gobierno de la desesperanza	39
EPÍLOGO: A título, tal vez, demasiado personal	72
RECONOCIMIENTOS	75

PRÓLOGO

Una noche en un bar

Una noche en un bar, hace casi diez años, cierto alero y yo agotábamos el último trago quejándonos inútilmente de la fauna política local. Echando mano de esa asombrosa lucidez ética que exhibe a veces la gente pasada de copas, mi colega soltó a modo de remate un enunciado cuya mesurada escrupulosidad e incuestionable vigencia justifican que retome ahora el episodio, con el deseo de trascender la obviedad de los tópicos trillados:

“No tenemos el gobierno que nos merecemos”, dijo, como liberando por fin una frase que ha permanecido largo rato incubándose. “Tenemos el gobierno que somos”.

Puestos ahora a hacer recapitulación de estos últimos cuatro años de desbarajuste cabe preguntarse qué tanto su esencia (para no recalcar únicamente en los resultados concretos) debería interpelarnos como sociedad. ¿No somos acaso, cada uno de nosotros, parte de un conglomerado tan heterogéneo, tan ambiguo, tan negligente, tan contradictorio, tan dividido, tan frustrante, tan frustrado y tan fallido como el desempeño de los representantes en quienes elegimos (sea por acción, sea por omisión) delegar los designios de esta achacosa nave llamada Guatemala?

Veamos.

El catorce a las catorce

En su discurso de investidura, Álvaro Colom anunciaba una etapa de transformaciones que hacía suspirar de chochera a algunos nostálgicos de la truncada primavera democrática, mientras que otros, a su vez, fruncían el ceño augurando más de lo mismo o, de plano, interpretando la transición como presagio lamentable de un regreso a tiempos que creían sellados ‘a sangre y plomo’.

A contrapelo de la gravedad que la ocasión exigía, ofreció una arenga improvisada, detalle que no pocos criticaron negativamente. Un mal signo, decían, ya que la pieza debió concitar el trabajo cuidadoso de los mejores cerebros de su equipo, máxime cuando la pretensión era forjar un hito histórico.

“Le toca a Guatemala, por primera vez en cincuenta años, un cambio hacia un gobierno socialdemócrata”, expresaba, con el timbre de voz que le había granjeado ya, y le seguiría granjeando, motes de burla y comentarios de desprecio. Ese cambio, dijo, empezaría con una definitiva prioridad: el que menos tiene. “Hoy empieza el privilegio de los pobres, empieza el privilegio de los sin oportunidad”.

Aseguró estar convencido de que dándole al menesteroso tendríamos más todos, sostuvo que la política social sería el principal instrumento para la armonía del país y anunciaba lo que poco después pasaría a convertirse en el logro más visible y más cuestionado de su administración a cargo del Organismo Ejecutivo: los programas de solidaridad, bajo la dirección del Consejo de Cohesión Social.

“Vamos a trabajar con el pequeño productor tanto en el área rural como en el área urbana”, prometió, ofreciendo tam-

bién “darle impulso total” al parque del Mirador, en el norte de Petén. “Será un parque gigantesco que, además, nos va a preservar la selva tropical que estamos perdiendo por falta de desarrollo”.

Manifestó asimismo sus intenciones de lograr una política fiscal estable y responsable. Algo “serio, de largo plazo”, que permitiera a los sectores privados “sentirse seguros”, para lo cual “nos tenemos que poner de acuerdo”. Habló de impulsar una Ley de la Dignidad Humana, “donde haremos ciertos los castigos para todo aquel que toque a un anciano, o toque a un niño o toque a un discapacitado”, y anunció su propuesta de crear un Ministerio de la Familia “porque queremos rescatar los verdaderos valores y principios de nuestra sociedad”. La familia, dijo, “necesita de ese rescate de principios y valores. Sandra y yo estamos dispuestos a dar el ejemplo”.

Ratificó su compromiso con un Plan de los Cien Días (“vamos a luchar y vamos a cumplirlo”), con un programa de 200 mil viviendas populares (“estamos seguros, lo vamos a ejecutar”), con el medio ambiente (“queremos ser responsables para que Guatemala haga lo que le corresponde en detener este cambio climático”), con los pueblos indígenas (“queremos una armonía de pueblos, queremos respeto a las distintas cosmovisiones, respeto entre las distintas culturas”) y con el cumplimiento “inquebrantable” de los Acuerdos de Paz y los derechos humanos, a fin de darle “vuelta a esta página sangrienta en Guatemala”.

Pidió, poco antes de concluir, ocho meses de plazo “para tener una seguridad estable”, y previo a cerrar su alocución sacó a relucir esa sensibilidad indigenista a la que ya había recurrido durante la campaña: “Nuestra socialdemocracia guatemalteca es una socialdemocracia con rostro maya”.

El banquete estaba servido: exhortaciones inspiradoras, promesas arrojadas al calor de la euforia, llamados edificantes a la concertación, a la solidaridad y a la concordia. Un globo tan inflado de buenas intenciones que no costaba mucho anticipar su inminente y bullicioso estallido. ¿Nos estaba mintiendo o se trataba más bien de un autoengaño? ¿Qué le pasa a los políticos? ¿Por qué encuentran tanta dificultad en pasar de las palabras a los hechos?

“Dicen que se hace campaña con poesía, pero se gobierna con prosa”, comenta Edgar Gutiérrez, economista, politólogo y ex Canciller. Pero el fárrago prosaico que caracterizó a la administración saliente es reflejo —como se sugería al principio— de eso que los guatemaltecos, en esencia, somos. Y si bien lo que en esencia nos caracteriza es una formidable (aunque conflictiva) diversidad, esta diversidad se ve remitida a una sola circunscripción territorial heredada de la Colonia, y sobre todo se ve congregada en torno a una historia común que es preciso conocer para intentar hallar, en ella, por un lado los precarios hilos que sostienen a nuestra sociedad y por otro lado los profundos vacíos que inhiben su desarrollo.

Un barco a la deriva

En su prólogo al libro *Rendición de cuentas*, del exministro Juan Alberto Fuentes Knight, el sociólogo Edelberto Torres Rivas observa que nada se asemeja tanto al Estado guatemalteco como un barco a la deriva, y nos recuerda que durante un siglo operó aquí un mal llamado Estado ‘liberal’ apoyado en los mandamientos coloniales, basado en el poder de los cafetaleros y del enclave bananero y “militarizado por todos lados, sujeto a las órdenes de Estados Unidos”.

De un Estado liberal pasamos, pues, a un Estado militar y luego a un Estado residual, raquítrico, debilitado a fuerza de

influencias foráneas (desde el golpe de 1954, fomentado decisivamente por la CIA, Guatemala no dejó nunca de seguir una línea obediente con la potencia del Norte, afín a su agenda geopolítica), disminuido a fuerza de infiltraciones mafiosas que operan en su seno con holgada impunidad desde antes de la refundación democrática de 1985, y desmantelado a fuerza de privatizaciones, emprendidas sobre todo en el período que va de 1996 al 2000, durante la administración de Arzú.

A lo anterior súmese el riguroso e inapelable poder de veto que ejerce el sector privado organizado en defensa de sus intereses económicos (según el BID, no hay país de América Latina cuyo sector empresarial influya en la formulación de políticas tanto como en Guatemala), la escalada criminal en el contexto de un clima social ya de por sí altamente violento y conflictivo (entre 1998 y 2008 los asesinatos pasaron de dos mil a seis mil anuales) y un sistema electoral y de partidos políticos volátil, disfuncional en su mandato de servir como vehículo para asegurar la representatividad.

Nos refresca Torres Rivas que, además, Colom ingresa como jefe de gobierno arrastrando dos circunstancias que debilitaban su margen de maniobra: una baja legitimidad como resultado de elecciones extremadamente competidas (en la primera vuelta ganó con escaso 3 por ciento de margen contra su oponente) y un partido político, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ya dividido antes del triunfo.

Tal era el escenario en el que debutaba la administración que hace unos días vimos salir por la puerta de atrás.

PRIMERA PARTE

La ilusión. El gobierno de la esperanza

Voluminoso y extremadamente detallista, el Plan de la Esperanza, elaborado año y medio atrás por los tecnócratas de la UNE, apostaba por transformar la sociedad guatemalteca con una visión de realizaciones que llegaba hasta el año 2032. Una madeja de objetivos generales, objetivos específicos, estrategias y acciones daba contenido a los cuatro programas en que se basaba el plan: solidaridad, gobernabilidad, productividad y regionalidad, que conllevaban otras tantas lealtades: humana, cívica, económica y vecinal, respectivamente. Volvía, además, a reclamar como suyos los principios socialdemócratas de libertad, igualdad, justicia social y solidaridad.

En concreto, Colom prometía crear 700 mil puestos de trabajo y 200 mil viviendas, elevar el crecimiento anual del PIB por encima del 6 por ciento frente al 5 por ciento, convocar un pacto en materia fiscal (aunque estando en campaña ofreció no aumentar los impuestos durante su primer año

de gobierno), implementar un plan de choque sanitario, lanzar otro plan urgente de atención a la desnutrición infantil y activar la previsión de los acuerdos de paz que permitiría comprar propiedades agrarias para distribuir las entre el campesinado sin tierras.

Anunciaba, también, la sustitución de deuda pública interna por deuda pública externa, el traslado de fondos públicos colocados en los bancos del sistema al Banco de Guatemala, la centralización de la información y comunicación gubernativas a través de una sola secretaría (que sería coordinada por Ronaldo Robles), la convocatoria a un diálogo nacional sobre temas de interés para el nuevo gobierno, la discusión de un nuevo pacto fiscal capaz de garantizar el financiamiento de los programas sociales venideros, y la creación de nuevos ministerios (como el de Familia, según dijo en su discurso inaugural) y secretarías de la Presidencia, así como de una empresa estatal de petróleo.

Contaba con 42.5 mil millones de quetzales como presupuesto asignado para el período fiscal 2008 y tenía, como potestad inédita, la flexibilidad de hacer transferencias ilimitadas e irrestrictas entre los ministerios.

Su gabinete entrante incluía a tecnócratas sólidos como Juan Alberto Fuentes Knight en la cartera de Finanzas, funcionarios de prestigio como Ana de Molina (Educación) y Haroldo Rodas (cancillería), líneas de continuidad respecto de la administración anterior como Vinicio Gómez (quien pasaba de viceministro a ministro de Gobernación), parientes como su tío Luis Ferraté en Ambiente y Recursos Naturales, titulares afines a la élite económica como Carlos Meany en Energía y Minas, nombramientos dudosos como Jerónimo Lancerio (agroexportador indígena-ladinizado) en Cultura y Deportes, figuras anodinas como Eusebio Del Cid en Salud Pública y Asistencia Social, y aparentes muestras de pago de

favores de campaña como la designación de Luis Alejos (primo de los hermanos Roberto y Gustavo Alejos, el primero presidente del Congreso durante tres períodos consecutivos, y el segundo, Secretario Privado de la Presidencia y principal financista identificable de la UNE) a cargo de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda.

Como desafíos, el nuevo gobierno tenía en puerta la presión de enfrentar el encarecimiento internacional del petróleo y su impacto en el precio de los alimentos, los elevados e insostenibles niveles de violencia y conflictividad, el desabastecimiento hospitalario, el hambre y la desnutrición en el interior del país y la falta de confianza en las instituciones. Algunos de estos problemas se agudizarían con el tiempo, sumándose a otras varias y graves crisis que vendrían después.

Dos banderas ondearían, desde entonces, en los actos oficiales junto al pabellón de Guatemala: una vieja, la de las Provincias Unidas del Centro de América (1823), que Colom quiso rescatar del pasado regional común en señal de integración de los países que conforman el istmo; y otra nueva, la de los Pueblos (2007), cuyos cuatro colores hacían referencia a mayas, garífunas, xincas y ladinos. La Granadera, marcha militar de larga tradición en actos públicos de todo tipo, era asimismo sustituida por el son tradicional El Rey Quiché como acompañamiento al ingreso del Presidente en sus apariciones oficiales.

El proyecto mimado del gobierno

La Primera Dama, figura usualmente relegada al cumplimiento de funciones decorativas en su calidad de esposa del Presidente y a quien, a lo sumo, se le delegan obras de beneficencia de limitado alcance (aunque útiles en cuanto operativos de relaciones públicas), adquirió desde un principio una importancia toral en el gobierno de Álvaro Colom. La

designación de Sandra Torres a cargo del Consejo de Cohesión Social, recuerda Fuentes Knight, fue anunciada desde la primera sesión de gabinete, en enero del 2008.

El programa más notable de Cohesión Social, Mi Familia Progresá (cuya fórmula había sido implementada con resultados sobresalientes en dieciocho países de la región, entre ellos México y Brasil), consistía en condicionar la entrega de trescientos quetzales a familias pobres a cambio de que las madres e hijos asistieran a centros de salud y a que los hijos atendieran la escuela, y fue determinante para contrarrestar la difícil situación derivada del marcado encarecimiento de la canasta básica como resultado del alza de los precios del petróleo ocurrido a principios del 2008.

Ya para agosto de ese año había más de 180 mil personas extremadamente pobres que se beneficiaban del programa, niño mimado del gobierno y de su pretendida vocación socialdemócrata, en contraste con 128 mil atendidos a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), aparte de otros programas entonces a cargo del ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) que se ampliaron gradualmente, como la refacción escolar.

Cohesión Social llegó a ser más importante que el propio gabinete, convirtiéndose en un foro de toma de decisiones tan fuerte que incluía no sólo a ministros sino también a secretarios y a directores de entidades que manejaban recursos, como FONAPAZ y el FOGUAVI. Según cifras oficiales, con una inversión equivalente a apenas 0.34 por ciento del PIB del país, Mi Familia Progresá acabó por cubrir 307 municipios (92 por ciento de un total de 333), con 887,912 familias inscritas, brindando cobertura a 2.4 millones de niños menores de quince años —en comparación, sólo durante el 2011 los bancos del país percibieron, en concepto de intereses cobrados al Estado, más de 130 millones de quetzales más de

los que gastó Mi Familia Progresá en sus primeros tres años de funcionamiento.

El programa de transferencias, reconoce el economista Fernando Carrera, hoy titular de la SEGEPLAN, era necesario para Guatemala, y era importante que se desarrollara a esa escala. Su antecesora en el cargo, Karin Slowing, opina que si bien el brazo social del Ejecutivo creció demasiado en relación con el resto del cuerpo, como una especie de miembro hipertrofiado del mismo, no menos cierto es también que el haber introducido las políticas de protección social en la agenda pública y en la conciencia ciudadana fue un legado importante del gobierno de Colom. “Vino para quedarse, por lo menos, durante los próximos dos o tres gobiernos”, pronostica.

“Son tan potentes los programas, y tienen tanto respaldo a nivel de organismos internacionales, que al Partido Patriota no le quedó otra que absorberlos”, coincide Enrique Godoy, economista, exdirector ejecutivo de FONAPAZ y excandidato a la alcaldía.

La política social impactó particularmente a las mujeres indígenas, sobre todo en las poblaciones más remotas de las regiones norte, noroccidente y occidente. Incrementó significativamente la cobertura educativa y aumentó la demanda por servicios de salud materno-infantil, según cifras oficiales. Los resultados de la tercera Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que si bien hubo un incremento en la pobreza (porque disminuyeron las remesas como resultado de la crisis financiera, y por lo mismo disminuyó también la inversión privada), no se reporta aumento de la pobreza extrema, a pesar de los severos aguaceros y sequías.

La violencia se combate con inteligencia

El área de seguridad y justicia registra, también, avances objetivos y concretos durante estos cuatro años. Objetivos y concretos, sí, pero a duras penas notables y en todo caso insuficientes, y aquí cabe hacer notar un correlato inversamente proporcional entre la percepción ciudadana (severamente influida por el discurso que los medios masivos de comunicación, en archiconocida complicidad con los intereses de la elite económica, lograron convertir en opinión pública dominante) acerca de los logros en gobernabilidad versus los logros en protección social: mientras con los primeros la impresión es que debió haberse hecho más, con los segundos el consenso apunta a que se hizo más de lo debido.

No es difícil rastrear el origen urbanocéntrico, capitalino, conservador, reaccionario y profundamente clasista de semejante discurso: a los pobres no hay que regalarles el pescado, dicen (aun cuando el costo total de ese pescado apenas rebase un tercio de punto del PIB nacional, y aun cuando su impacto efectivo se traduzca en trescientos miserables quetzales al mes por familia, el equivalente a lo que una pareja estándar se gasta con los hijos en una tarde de cine y poporopos), sino enseñarles a pescar (aunque en el ínterin, mientras van aprendiendo a hacerlo, decenas de miles de niños desnutridos y enfermos sigan muriendo como moscas). ¿Por qué? Porque los pobres son invisibles y, por lo tanto, es como si no existieran. Y los que están a la vista se aprecian flemáticamente como un detalle más de colorido folclor en el paisaje.

Pero, en cambio, ningún esfuerzo es suficiente en materia de seguridad y justicia. ¿Por qué? Porque los asaltos a buses, el robo de celulares, el bandolerismo común, la muerte de pilotos, los secuestros, las extorsiones, los homicidios, los cuerpos descuartizados se concentran aquí, en los núcleos urbanos, sobre todo en la región metropolitana, y de manera muy acentuada en la ciudad capital, realidad que según el sociólogo Gustavo Berganza contribuye de manera decisiva

a mantener en el imaginario de la población “la certeza de que en vez de mejorar, la seguridad ciudadana se ha deteriorado aún más”.

Otros factores de índole bastante menos subjetiva influyen, por supuesto, en que el combate a la delincuencia se aprecie como insuficiente: por un lado, los esfuerzos se han concentrado sobre todo en casos (Rosenberg, Fariñas-Cabral, Siekavizza) y fenómenos (narcotráfico) de alto impacto, dejando al ciudadano de a pie en condiciones de indefensión muy similares a las de hace cinco años. Más allá de las cifras duras que acusan una leve disminución en el índice de homicidios en los primeros meses de 2008 y en todo 2011 (acompañadas de una subida en 2009 y 2010), y de un pronunciado incremento en la incautación de bienes a la mafia, no hay disponibilidad de mediciones sobre victimización, aunque todo parece indicar que las variaciones son insignificantes.

Por otro lado, buena parte de los avances emprendidos se circunscriben apenas a las invisibles pero necesarias fases preventiva y de investigación. Mejoró considerablemente la capacidad de inteligencia de la Policía, que junto al Ministerio Público y la CICIG lograron resolver decenas de casos de asesinatos. La desarticulación de las redes de violencia, destaca Carrera, se hizo empleando sistemas de información, no de represión, “y ahí está la inteligencia, que consiste en aplicar la criminología como ciencia, respetando los límites de la democracia porque se combate el crimen sin violar los derechos humanos”.

De parte de Gobernación, el mérito le corresponde en buena medida a Carlos Menocal, último de los cinco ministros nombrados para el cargo desde enero del 2008. Prolijo a la hora de enumerar sus logros, firme en sus argumentos, decididamente leal a la agenda que le dictaba el Presidente, Menocal habla de cómo se empezó a armonizar el sistema de

inteligencia, que tenía siete meses de haberse creado cuando entró Colom y su equipo. Menciona el incremento en un tercio al salario de los policías. Mil patrullas nuevas en cuatro años, 8,760 agentes más. Suficiente reserva de municiones, 400 muertes evitadas gracias a las escuchas telefónicas. Y las Escuelas Abiertas: “Más de 250 mil jóvenes que los fines de semana, en vez de estar en la calle tentados por el pillaje, están en hip-hop, en internet, en karate, en danza, en música, y a cada uno se le dan sus tiempos de comida”.

La tasa de homicidios logró frenarse, e incluso reducirse. En el 2007 se registraron 46 por cada cien mil habitantes, mientras que en el año pasado hubo 38, la cifra más baja desde el año 2004. “Llevamos casi catorce meses en los que ha habido menos muertes que en el mes anterior, y eso no sale en los medios”, subraya Godoy.

Catorce de los principales diecinueve narcotraficantes están hoy tras las rejas, como resultado de operativos sin precedentes en cuanto a precisión y efectividad, realizados en mancuerna con un Ministerio Público recientemente fortalecido y con el apoyo del Departamento Estadounidense Antidrogas.

Las incautaciones se incrementaron más de once veces, de 8.2 mil millones durante el gobierno de Óscar Berger a 93.4 mil millones de quetzales durante el de Colom; un crecimiento que el Periódico le atribuye no tanto al esfuerzo del gobierno sino a “la decisiva y efectiva intervención de los EE.UU.”, o simplemente a que el trasiego y la actividad de los cárteles aumentaron también de manera exponencial en el país. “Se necesita ser un cínico para afirmar lo contrario”, dice su editorial del pasado 7 de enero.

Fernando Carrera, que de cínico tiene muy poco, es de los que afirman lo contrario. Explica que la cantidad de super-

ficie cultivada y de droga producida en los últimos diez años se ha triplicado a nivel mundial según la DEA. “En el 2011 Guatemala incautó veinte veces más droga que en el 2006, por lo tanto, sí puede hablarse de un logro más allá de lo proporcional”, sostiene.

Gratuidad, pero no calidad

El analfabetismo disminuyó de un 22.4 por ciento en el 2007 a un 17 por ciento en el 2011 según cifras oficiales. Además, en cumplimiento a lo estipulado constitucionalmente, por primera vez en 25 años se instituyó la gratuidad en los servicios de educación y de salud. Se aumentó, asimismo, la cobertura en ambas áreas de manera significativa, no así la calidad de los servicios prestados ni la constancia en su abastecimiento.

Bajo la dirección de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, los medios públicos (TGW y la red de radios nacionales, junto con el Diario de Centroamérica) fueron remozados para romper el dominio de la difusión de los medios privados capitalinos, sobre todo los impresos y radiales. Lamentablemente, tanto la radio como el diario mostraron un grado sólo parcial de autonomía. A decir de Berganza, “había temas que debían ser consultados con Robles y Menocal y otros que venían ordenados por ellos”, no obstante lo cual llegaron a ser, por primera vez en mucho tiempo, una fuente alternativa de información confiable.

Por último, cabe mencionar la rehabilitación de algunas figuras del pasado nacional que, gracias al llamado grupo de los Peludos (Orlando Blanco, Ronaldo Robles, Carlos Menocal, Fernando Barillas), fueron des-satanizadas o de plano rescatadas del olvido: Oliverio Castañeda, Jacobo Árbenz, Juan José Arévalo, Manuel Colom Argueta. Con iniciativas como la muestra Oh Revolución: múltiples visiones 1944-2010 el

Estado revisa, de manera pública (no sin cierta conflictividad nacida de la oposición encarnada en la élite conservadora y la línea más intransigente del Ejército), una parte de la historia reciente que había permanecido silenciada y, por lo tanto, ignorada. Hubo reconocimiento oficial de los crímenes cometidos durante la guerra. Una perspectiva ideológica distinta de los mismos hechos fue puesta a disposición de la ciudadanía para enriquecimiento de sus insumos de análisis.

* * *

De vuelta a los primeros meses de gobierno, muy pronto empiezan a darse algunas destituciones y renunciaciones que, sumadas al agravamiento de ciertas crisis (sistémicas, tanto como coyunturales) y a la exigencia de cumplimiento de las promesas de campaña, ocasionaron que la ciudadanía adoptara una postura distinta para con el Ejecutivo: del beneficio de la duda pasaban a un franco escepticismo crítico, rayando cada vez más en la desconfianza y la antipatía.

En realidad la luna de miel entre gobernantes y gobernados duró relativamente poco, y aquí cabe señalar como principal responsable no sólo a Colom mismo por levantar expectativas demasiado altas en la población sino también a un actor clave en su capacidad de influencia: los medios noticiosos de alcance masivo, en especial los radiales e impresos, orgáni-

camente alineados con el establishment del país, económicamente dependientes de él y opuestos en intereses a buena parte de las políticas que esta administración se proponía implementar...

SEGUNDA PARTE

La frustración. El gobierno de la ambigüedad

Junio, 2010. En semanas recientes Guatemala ha sufrido dos embates concomitantes: la tormenta tropical Agatha y la erupción del volcán de Pacaya. El país está colapsado.

Álvaro Colom se encuentra junto a su concejo de ministros y secretarios, presidiendo la reunión de gabinete, y gira instrucciones precisas: lo que resta del presupuesto para ese año deberá reorientarse para obras de reconstrucción.

Una vez disuelta la junta, Karin Slowing, titular a cargo de la SEGEPLAN, delega entre los suyos las directrices correspondientes en atención a las indicaciones del Presidente. Al no ser unidad ejecutora, la dependencia a su cargo se dispone a monitorear las acciones emprendidas por los ministerios.

Sorpresa: resulta que nadie está haciendo nada. Slowing envía cartas en señal de advertencia. La situación es crítica. La nación se desmorona.

Días más tarde recibe una citación de la bancada oficial indicándole que debe presentarse en el Congreso. Quieren saber el porqué del monitoreo y de las cartas. “¡Era una orden del Presidente!”, protesta, ingenua y espontáneamente sorprendida. “¡Y nadie la estaba cumpliendo!”.

* * *

Los vínculos, alianzas, apoyos y financiamientos que le permiten a un candidato alcanzar la presidencia inciden luego en el margen de maniobra con el que habrá de gobernar, y afectan también la agenda a seguir durante su gestión. Ese marco limitado (y hasta cierto punto comprometido) de autonomía para el ejercicio de los cargos de poder es propio de la práctica política, pero ciertamente puede ser mayor o menor dependiendo de las circunstancias.

Veamos.

Álvaro Colom funda la UNE en septiembre del 2002, luego de su ruptura con la Alianza Nueva Nación (ANN), conglomerado de centroizquierda por el que había sido postulado a las elecciones tres años antes. Algunos diputados de esa agrupación se van con él, pero el control del proyecto muy pronto se le escurre de las manos debido a la amplitud de sectores e intereses representados en su seno, resultado de esa notable habilidad que lo ha hecho capaz de hacer mancuerna y pactar con tirios tanto como con troyanos.

Contrario a las señales de identidad socialdemócratas que reclamaba para sí, en realidad el nuevo partido reunía integrantes de diverso sello ideológico, desde militantes desencantados de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca hasta antiguos miembros del Ejército, pasando por exfuncionarios del gobierno arzuísta y tránsfugas del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en ese entonces en el poder. El mismo perfil empresarial de Colom, que antes de

dedicarse de lleno a la política había destacado como propietario y líder gremial del negocio de maquilas (industria manufacturera caracterizada por sus deplorables condiciones laborales y salariales), evidenciaba en él, si no una contradicción, al menos un significativo viraje en términos de discurso y praxis.

Para 2007, año en que Colom competía por tercera vez en los comicios, la UNE era ya el partido político de mayor base a nivel nacional, con más de cien mil afiliados. El hoy expresidente ganó las elecciones con el 52.8 por ciento de los votos en una segunda vuelta marcada por el abstencionismo (51.7 por ciento), siendo la primera vez en la historia del país que alguien resultaba triunfador aun habiendo perdido en la ciudad capital, lo cual dejaba entrever que su respaldo político provenía casi exclusivamente de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos.

La agrupación consiguió 51 escaños en el Congreso (de un total de 158), pero durante el primer año de gobierno se produjo una diáspora en la bancada oficial: casi la mitad de los diputados de la UNE abandonaron el partido, poniendo de manifiesto el carácter prácticamente postizo de una cuadrilla de trabajo en realidad inexistente, sin mística ni visión de largo plazo.

“Al ser demasiado polifacética, por no decir esquizofrénica, la agrupación nunca terminó de consolidarse”, destaca Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Es el precio que se paga por ceder espacios en función no de ideas compartidas sino por interés en obtener beneficios a corto plazo: “Cuando en vez de formar equipos sólidos uno mete a caciques territoriales sólo por atraer votos, es como venderle el alma al diablo”, opina Enrique Godoy. “Aunque se gane la elección, ya se sabe que va

a pasar después”.

La constelación del poder

El Congreso de la República, incluyendo por supuesto el hervidero de negociaciones que sus integrantes acostumbran fraguar al margen de toda actividad reglamentaria, goza en Guatemala de muchísima incidencia. Al respecto, Fernando Carrera evoca la apreciación del politólogo Francisco Beltranena, según la cual en nuestro país vivimos un régimen semiparlamentario: “Acá el Congreso tiene mucho poder, no sólo político sino sobre todo legal, jurídico, y eso permite que la agenda del Legislativo se imponga sobre la del Ejecutivo”, explica.

Pero está, también, el poder que Colom delegó en el círculo más cercano de colaboradores suyos, conformado principalmente por Sandra Torres, Gustavo Alejos (Secretario Privado de la Presidencia y principal financista identificable en su calidad de gerente de la empresa Conjunto Magno) y el grupo de los Peludos. A Torres, según se explicó en el capítulo anterior, le fue asignada la conducción del proyecto mimado del gobierno, el Consejo de Cohesión Social, cuyo impacto económico y mediático le valió a la Primera Dama un protagonismo indisputable que llegó a competir incluso con el que en principio le hubiera debido corresponder a su entonces consorte.

De Gustavo Alejos puede decirse en cambio que, pese a su perenne bajo perfil, fue el principal operador político y hombre de confianza número uno del Presidente. El cargo que ocupó le permitía una posición privilegiada en la repartición de negocios públicos, así como en el nombramiento de ministros, secretarios y directores. La influencia por él ejercida fue descrita como omnímoda: si en la antigüedad todos los caminos conducían a Roma, así también durante el gobier-

no de la UNE casi todos llegaban a él —sugirió el periodista Enrique Naveda. Y por aparte, el poder delegado en los Peludos (Orlando Blanco, Ronaldo Robles, Carlos Menocal, Fernando Barillas) descansaba en una relación con el dirigente cuya base era cierta sensibilidad política compartida que, con el tiempo, fue desarrollando vínculos de lealtad relativamente fuertes y estables.

En la constelación alrededor de Colom aparecen asimismo otras figuras que sufragaron su campaña, como Tomás Zaragoza (fundador del Grupo Tomza, distribuidor de Zeta Gas), Jack Irving Cohen (propietario de la farmacéutica J. I. Cohen, que en tres años firmó contratos con el Estado por 520 millones de quetzales), Gregorio Valdés (cuyo abanico de empresas se inserta en sectores que van desde el aeronáutico hasta el de la telefonía, pasando por el de la construcción), Roberto Dalton (presidente de Disagro, corporación dedicada a la venta de fertilizantes e insumos agrícolas y a quien Colom nombró director ejecutivo de PRORURAL), Carlos Quintanilla (criador de semovientes, dueño de una empresa de seguridad y guardaespaldas de lujo de Colom durante ocho años, recompensado luego con la titularidad de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS), Ricardo Cortés (abogado y empresario con negocios en Miami), Alfredo Mirón (con operaciones comerciales en el sector agropecuario), y “algunos banqueros”, en palabras del ex viceministro de Finanzas Ricardo Barrientos.

El Tribunal Supremo Electoral informó en su momento que en la nómina de financistas aparecían también Guillermo Castillo (segundo ministro de Comunicaciones nombrado por Colom), Luis Alejos (primo de Gustavo, encargado financiero a nivel nacional de la UNE y antecesor de Castillo en la cartera de Comunicaciones), José Ramón Fernández (finquero retalteco muy influyente en la costa sur) y Ricardo

Luna (dueño de la licorera Distribuidora Baco). Sin embargo, según informa la revista *El Observador* (No. 9, octubre 2007), no se cita a empresarios que también aportaron lo suyo, tales como Carlos Meany (propietario de Maderas El Alto y de algunas compañías textiles, luego nombrado ministro de Energía y Minas), Fernando Monroy (con negocios en la industria cerámica) y Luis Pedro Chang (socio de Monroy en una empresa que presta servicios de grúas portuarias, señalada de contratos anómalos en los gobiernos de Arzú y Portillo).

Una personalidad compleja en busca de equilibrios

Con una bancada descrita por Fuentes Knight como “dispersa, oportunista y sin principios”, sumada a una Primera Dama que le imprimía gran fuerza a sus propios proyectos a costa de otros del gobierno si era necesario, Colom veía cómo iban cerrándose algunos espacios. A esos factores externos habría que agregar un temperamento que el mismo exministro refiere como ambivalente, sin definiciones precisas, casi como ensayando estrategias de sobrevivencia política frente a condiciones extremas.

En virtud de personalidades diametralmente opuestas, parecía haber una relación de complementariedad casi mecánica entre el Presidente y su esposa. A criterio de Berganza ella era dueña de toda la voluntad, la intransigencia, la fuerza y la pasión por hacer cosas que él no tenía. “Fue la espina dorsal que a él le faltaba”. Mientras las decisiones del Presidente siempre flotaban en la incertidumbre, con doña Sandra se sabía a ciencia cierta si era sí o no —comenta el politólogo Gustavo Porras. “Llenó los vacíos existentes y rebalsó muchos espacios ante la incapacidad operativa de la burocracia gubernamental”, a decir de Iduvina Hernández, directora de la organización Seguridad en Democracia (SEDEM).

Algunos epítetos, recogidos de entre especialistas y conocidos del expresidente, permiten conformar un mosaico policromático de apreciaciones intersubjetivas acerca de Colom:

“Inseguro. Con mucha inteligencia y conocimiento de lo público pero falto de carácter para enfrentar todas las decisiones que se requerían” (Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA).

“Vacilante. Exagerado buscador de equilibrios” (Hernández).

“Mandilón. Sorprende cómo alguien tan falto de carácter y con tan poca claridad sobre lo que quería hacer hubiera llegado tan lejos” (Berganza).

“Un político débil y timorato, pero honestamente comprometido con la política social. Una buena causa muy mal servida” (Carrera).

“Un bejuco noble, frágil en su constitución pero flexible y que, con un apoyo fuerte, es capaz de dar lo mejor de sí” (Slowing).

“Demasiado conciliador” (Marco Cerezo, director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, FUNDAECO).

“Una personalidad compleja” (Barrientos), “como casi todos los políticos” (Carrera).

“Un hombre bueno, preso de las circunstancias en las que le tocó vivir estos cuatro años, sean de carácter familiar, político o público” (Ardón).

“Obligadamente conciliador, producto de sus circunstancias y su historia” (Ronaldo Robles).

“Aguambado. Flojo, pendejo e incoherente” (Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala, CALAS).

Hasta aquí ha sido omitida la mención de una figura, el Vicepresidente, cuyas atribuciones (coordinar la administración pública, co-formular la política exterior del Estado, cubrir el mandato presidencial en caso de ausencia) son de máxima relevancia pero que, sin embargo, de acuerdo al consenso crítico tampoco fueron llenadas satisfactoriamente. Rafael Espada —escribe Fuentes Knight en su libro— no supo aprovechar las fortalezas de la propia vicepresidencia, que tenía un espacio de acción muy amplio aunque sin la burocracia que le permitiera concretar o darle seguimiento a muchas de las acciones que él impulsaba en el ámbito propiamente político.

Quizás, dice, una ausencia de visión estratégica le impidió ejercer un grado de influencia parecido al de alguno de sus antecesores, a lo que se agregaba el espacio ganado por Sandra Torres, que reducía su campo de acción. Y aquí encaja como anillo al dedo aquel chiste según el cual los problemas del gobierno se debieron a que el Presidente actuó como Vicepresidente, mientras la Primera Dama se creía Presidente y el Vicepresidente hizo las veces de Primera Dama.

Dimes y diretes

Demasiado pronto empezó a pesarle a Colom el costal de ofrecimientos que no tuvo reparos en esparcir durante la campaña, o a la hora de hacer público su llamado Plan de la Esperanza, o a través de aquel Plan de los Cien Días que, dicho sea de paso, incluía la ampliación de zonas francas (¿será esa, acaso, una medida socialdemócrata?) y que en palabras de Edgar Guerra, presidente de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano, “sirvió de papel higiénico”.

¿Cómo no advertir, en el discurso del expresidente, esos mismos rasgos de irresponsable fanfarronería y de afable vacuidad, a medio camino entre el pudor cobarde y la hipocresía, tan prototípicos del guatemalteco? Mañana te pago... Nunca más vuelvo a beber... En enero me pongo a dieta... Sólo la puntita... Disculpe... Fíjese... Ahorita voy... No tenemos el gobierno que merecemos, tenemos el gobierno que somos.

“Resolvemos las cosas a medias. Adoptamos soluciones de parche. Destapamos un hoyo para tapar otro”, escribía Manuel José Arce en referencia a los chapines y su abultada reserva de cláusulas dilatorias. “La sonrisa, el ademán, las fórmulas de cortesía, de elusión, diminutivos y diminutivos de diminutivos, complementan el lenguaje velado, el circunloquio. Grita o se esconde en condicionales discretos. No se logra asir fácilmente en un sí o un no. Simula, inventa, elude, se miente a sí para poder mentir a los demás”, retrataba Luis Cardoza.

Eugenio Incer, investigador de AVANCSO en el área de estudios sobre el campesinado, se dio por un tiempo a la tarea de registrar los vaivenes en el discurso de Álvaro Colom, observando en él recurrencias que perfilaban su carácter altamente ambiguo, como el hecho de reconocer el peso de la historia y, unos días después, afirmar frente a coroneles y generales que “hay que voltear la página”, en referencia al conflicto armado interno; o como haberse atrevido a decir que la familia necesita del rescate de principios y valores, y que “Sandra y yo estamos dispuestos a dar el ejemplo”, para luego consentir su propio divorcio en el vano intento de eludir un escollo legal que le impedía a Torres optar por la presidencia. “Este proceso electoral nos trajo, a Sandra y a mí, ese acercamiento con la Biblia. Yo no sé si los pastores tienen tantas biblias como nosotros”, había dicho el 15 de enero del 2008 en su visita a la Fraternidad Cristiana.

Y así, entre dimes, diretes, personalidades vacilantes, voluntades dominantes, incertidumbres crecientes, oportunismos rampantes y constelaciones de poder siempre al acecho, los primeros reveses del gobierno no tardaron en aparecer.

Rupturas, renunciaciones, destituciones, escándalos

Aquejado por un derrame cerebrovascular, José Carlos García, ministro de Economía, fue el primer miembro del gabinete en presentar su renuncia el 17 de marzo, apenas dos meses y tres días después de haber asumido funciones. En tan breve lapso había sufrido, en sendas reuniones de gabinete, tres o cuatro arremetidas de Sandra Torres, quien descalificaba de manera tajante sus acciones para enfrentar la crisis. Así lo refiere Fuentes Knight en su Rendición de cuentas.

La siguiente baja, mortal en este caso, ocurriría a finales de junio con el fallecimiento de Vinicio Gómez, titular de Gobernación, y de su viceministro de Seguridad Edgar Hernández, en un confuso accidente de helicóptero cuyas causas fueron atribuidas de manera oficial a que el piloto de la nave, con experiencia de seis mil horas de vuelo, omitió revisar si contaba con reservas de combustible suficientes para llegar a su destino.

El mismo Colom duda todavía de esa versión y sospecha que se trató de un asesinato. Las suspicacias son comprensibles teniendo en cuenta que en México han fallecido ya dos secretarios del Interior en circunstancias demasiado similares y además en un contexto, también compartido, de combate frontal a los poderosos cárteles del narcotráfico.

Raúl Robles y Eusebio Del Cid, ministros de Agricultura y de Salud respectivamente, fueron removidos de sus cargos a mediados de julio. La salida de ambos obedeció, según fuentes del Ejecutivo, a su escaso desempeño: en el caso del

primero se mencionaban algunos problemas en la entrega de fertilizantes, y en el del segundo la falta de soluciones a la crisis.

En septiembre se produjo el despido de Carlos Quintanilla, secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, por un escándalo de espionaje en las oficinas y la casa de la pareja presidencial. Poco después, a finales de diciembre fueron destituidos Marco Tulio García, titular de la cartera de Defensa, junto con su viceministro, el jefe y el subjefe del Estado Mayor y el inspector del Ejército. Se dijo que el cambio obedecía a la necesidad de renovar la cúpula castrense para poder cumplir con el plan de seguridad trazado, aunque extraoficialmente trascendió que se habían negado a acatar las órdenes presidenciales en relación con la entrega de los archivos militares para hacerlos públicos.

Antes de terminar el 2008 se produciría una aparatosa estampida de diputados fuera de la bancada oficial. Manuel Baldizón fue expulsado “por indisciplina y faltas a las normas internas”, llevándose consigo a doce correligionarios. Uno de ellos, Luis Enrique Mendoza, declaró a la prensa que su salida y la de sus compañeros se debió a que nunca fueron tomados en cuenta para integrar el comité ejecutivo, y responsabilizó a las hermanas Sandra y Gloria Torres de pretender quedarse con el poder del partido para dirigirlo de acuerdo a sus intereses.

Baldizón formó a partir de entonces su propia agrupación política, con la que llegó a segunda vuelta en los comicios presidenciales recién pasados. Mientras tanto la UNE, que había empezado la legislatura con 51 escaños, se quedaba solamente con 29, viéndose forzada a pactar con otras bancadas para impulsar a duras penas su agenda en el hemisiciclo.

Nombramientos tambaleantes

Después de 36 cambios de ministros, sólo el Canciller Haroldo Rodas se mantuvo en el cargo a lo largo de toda la administración. El sucesor de Robles en Agricultura, Julio Recinos, renunció en marzo del 2009 por supuestos “motivos personales”. En su lugar quedó Mario Aldana.

A Economía no le fue mejor. Tras dos meses sin ministro, se nombró a Rómulo Caballeros en mayo del 2008, quien renunció en marzo siguiente. Para reemplazarlo fue designado Rubén Morales, quien dimitió en junio del 2010. Ese mismo mes se marcharon el ministro de Energía, Carlos Meany, y el de Finanzas, Juan Alberto Fuentes (éste último alegraría más tarde un apoyo insuficiente por parte de Colom tras reiterados e infructuosos intentos de reforma fiscal). Su sucesor, Edgar Balsells, se distanció también de la política gubernamental arguyendo desorden en el gasto público y finalmente fue destituido en noviembre del 2010.

En Gobernación, Francisco Jiménez fue nombrado tras el deceso de Gómez, pero no llegó a durar en el ejercicio de su cargo ni siquiera seis meses, al ser trasladado al Consejo Nacional de Seguridad (más adelante recibiría una demanda por incumplimiento de deberes y abuso en un contrato suscrito por el Registro Nacional de las Personas, RENAP). En enero del 2009, Sandra Torres consiguió colar a un operador suyo, Salvador Gándara, quien dejó el cargo el 7 de julio (más adelante la CICIG lo ligó a proceso por concusión y lavado de dinero). En su lugar quedó Raúl Velásquez, quien se vio involucrado en la compra anómala de gasolina para la Policía a través de una empresa de cartón (el famoso caso Maskana). Fue destituido en febrero del 2010. En su relevo ingresó Carlos Menocal.

Mario Aldana, tercer ministro de Agricultura, también fue

removido en febrero del 2010 por irregularidades en la licitación de fertilizantes (Ricardo Barrientos, quien siguió de cerca el proceso, asegura que Aldana quiso hacer compras de alimentos correctamente, “pero se generó un escándalo y tuvo que salir”). En su lugar fue nombrado Alfonso De León.

En Salud, Celso Cerezo fue nombrado para sustituir a Del Cid, pero en septiembre del 2009 Colom le pidió la renuncia por “problemas de conducción política” hacia los diputados, miembros del gabinete y de la prensa, aunados a la crisis del sistema de sanidad pública.

Por último, en Educación Ana de Molina dimitió en julio del 2009 por desacuerdo con relación al presupuesto asignado y la injerencia de Cohesión Social en detrimento de la calidad educativa. Su lugar fue ocupado por Bienvenido Argueta, incondicional de Sandra Torres, a tal extremo que cuando la diputada Nineth Montenegro le requirió información de beneficiarios de Mi Familia Progresiva, la entregó incompleta. Tras plantearse un recurso, la Corte de Constitucionalidad ordenó la destitución de Argueta en marzo del 2010. Fue reemplazado por Dennis Alonzo.

Algunas explicaciones

¿Hasta qué punto semejantes pautas de discontinuidad son la norma regular y no la excepción en el contexto de nuestra administración pública reciente? “No es para tanto”, sostiene Barrientos, si se exceptúa lo ocurrido en Agricultura, donde lo que pudo apreciarse fue “un desfile de ministros sin poder frente a un proyecto de negocios empresarial”, y en Gobernación: “Gómez murió, Gándara y Velásquez cometieron anomalías registradas por la Contraloría y por lo tanto había que removerlos, y Jiménez fue muy ingenuo por firmar documentos que lo comprometieron”.

Ardón, en cambio, explica el fenómeno en razón de “un pas-

ticho” de intereses cuya composición inicial nunca se terminó de asentar como proyecto político. “Creo, también, que la influencia de la Primera Dama y su manera tan peculiar de conducción pudo haber causado algunos cambios”, especula. “Y, por supuesto, las malas escogencias. No hubo equipos claros”.

Carrera complementa esta idea: “Una pésima gestión del Presidente, con una conducción errática. No fue un líder firme, lo cual le llevó a manifestar sus intereses de manera voluble, y eso se vio reflejado en sus colaboradores más cercanos”. Además, dice, cambiar de gerentes continuamente no garantiza éxitos en una administración, sino todo lo contrario.

El peso de Sandra Torres como factor de hecho dentro del gobierno y su estilo explosivo de ejercer la autoridad es señalado también por Gutiérrez, variables que redundan en una estructura de mandos que propiciaba “conspiraciones y directivas bicéfalas”. La improvisación y la rotación, dice, “es un rasgo de gobiernos frágiles”.

Hernández, a su vez, le atribuye el fenómeno a la carencia de cuadros políticos y técnicos necesarios para conducir de manera adecuada un programa de gobierno serio, problema estructural del Estado guatemalteco y, por lo tanto, no exclusivo de este mandato.

El país de la eterna crisis

Además de la gasolina, los precios del trigo y del maíz en Guatemala aumentaron de manera considerable a partir de marzo del 2008, provocando que se incrementara también el precio del pan y las tortillas: era la primera de las crisis que le tocaría enfrentar a la administración de Colom. Asimismo subió la leche y el arroz, todo lo cual se reflejó en una tasa de inflación más de tres veces mayor a la del año anterior (de

haberse mantenido esa tendencia, revela Fuentes Knight, el país hubiera podido llegar a una inflación anual de entre quince y veinte por ciento o más, superada en nuestra historia reciente sólo en 1990, cuando se permitió una fuerte devaluación del quetzal).

Una segunda crisis, también económica, fue la recesión financiera mundial a finales del 2008, extendida durante todo el año siguiente. En mayo del 2009 se generó una tercera crisis, de índole acaso más mediática que médica, con el ingreso al país de la pandemia de gripe A (H1N1). La noticia de su aparición cundió con una rapidez y una intensidad superiores incluso a la de la propagación del virus mismo, lo cual se explica en parte por la tendencia de las cadenas informativas dominantes a generar contenidos que buscan, por encima de todas las cosas, impactar la sensibilidad del público, y en parte también porque la infección se originó en México, país vecino con el que la nación guatemalteca comparte una frontera tan extensa como porosa.

Como sea, los niveles de histeria resultaron siendo mayores que el peligro propiamente dicho, no obstante lo cual, y pese a que el gobierno tomó algunas medidas en los sistemas de emergencia y prevención, se registraron mil 170 casos y diecinueve muertes. El pánico a la gripe porcina quedó muy pronto en el olvido cuando de manera simultánea surgió la cuarta crisis, esta vez de carácter político, provocada por la muerte de Rodrigo Rosenberg, cuyas declaraciones póstumas hicieron tambalear la institucionalidad del país generando un clima de tensa polarización, exacerbada por el reciente golpe de Estado en la vecina Honduras.

La erupción del Pacaya y la tormenta Agatha, ocurridas en 2010 y también en simultáneo, representan el quinto gran dolor de cabeza que sufrió el gobierno. El conteo se incrementaría con, por lo menos, tres crisis más: una de goberna-

bilidad, ocasionada por disputas territoriales entre cárteles del narcotráfico (con su respectivo saldo de terror y muerte) que condujeron a declarar estado de sitio en Petén y Alta Verapaz; otra climática, con la llegada en octubre del 2011 de la depresión tropical 12-E, cuyos daños (cuantificados en 2.7 mil millones de quetzales) sumieron al país entero en estado de Calamidad Pública; y la tercera, política, con el desgaste que supuso la candidatura presidencial de Sandra Torres, truncada en último momento tras un fallo adverso de la Corte de Constitucionalidad.

El desenlace de la Sandrofobia en las cortes, reconoce Slowing, tuvo un impacto interno muy grande. “Afectó el desempeño diario de todos nosotros, muy especialmente en términos de desarrollo”. Sin embargo, al hacer referencia a otros momentos difíciles resalta el desempeño de Alejandro Maldonado (titular de la CONRED) en su reacción al impacto que ocasionaron los derrumbes e inundaciones, y de Haroldo Rodas (ministro de Relaciones Exteriores) en su pronta y efectiva movilización para obtener apoyos internacionales durante el llamado Rosenbergazo. Hubo buenos manejadores de crisis, dice. Y agrega: “Desgraciadamente, faltaron cuadros entrenados para convertir las crisis en oportunidades”.

Sin embargo, señala Carrera, de una manera o de otra el gobierno logró sobrevivirlas a todas, incluso habiendo enemigos directos y manifiestos en sus intenciones de derrocarlo: “El rompimiento constitucional no sólo se mencionó con la crisis Rosenberg sino también en el 2011, en caso hubiera sido aprobada la candidatura de Sandra Torres, por temor a que su caudal electoral le permitiera obtener la victoria”. A su criterio, lo de las crisis internacionales fue mala suerte, no así las tormentas: “No hay políticas públicas de prevención de riesgos derivados del cambio climático”, reprocha con sobrada razón, si se tiene en cuenta que Guatemala ocupa

el segundo lugar en vulnerabilidad por el cambio climático, sólo más protegida que Bangladesh.

Ardón opina que muchas de estas crisis develaron no sólo las debilidades del gobierno sino las del Estado. “La gerencia fue cuestionable y el funcionariado, pobre”, sostiene, “pero el instrumental para trabajar también es deficiente”. Y un detalle más, muy importante por cierto, para explicar el hondo y aún latente efecto que dejó el rosario de crisis en el imaginario nacional: la cobertura mediática, de sesgo marcadamente desfavorable durante toda la administración. “No destruyeron a Álvaro Colom sino al país”, se queja Slowing, “y a mí me indigna, porque si algo le hace falta a los guatemaltecos es volver a confiar en su Estado”.

El papel de la prensa mal llamada ‘independiente’

La prensa adversa a Colom y a su equipo de gobierno, que fue mayoritaria en número y sistemática para atacarlo (cebándose sobre todo en la figura de Sandra Torres y los programas por ella impulsados), contribuyeron decisivamente a incrementar la hostilidad ciudadana y a enrarecer su percepción respecto de un desempeño de por sí caracterizado por la opacidad, la torpeza y el despilfarro.

Pero ojo, que no es lo mismo opacidad que corrupción, explica Slowing. Se trata de problemas distintos con estrategias diferenciadas para su combate. Según ella, fueron principalmente la ignorancia y el desprecio por los procesos, por un lado, y la opacidad por el otro, los rasgos que caracterizaron el actuar de la gestión saliente. Los niveles de corrupción más bien se mantuvieron, al menos en el Ejecutivo, en una escala similar a la de administraciones anteriores.

No obstante, la prensa local, en teoría obligada a escarbar los hechos superficiales a fin de sacar a luz evidencias que se encuentran más allá de lo aparente, eligió más bien (con

algunas excepciones en todo caso minoritarias) evidenciar la organicidad de sus vínculos económicos, comerciales e ideológicos con el sector privado y con la tradicional oposición de éste a las políticas reformistas. De hecho, es común observar en sus espacios esa costumbre, convertida casi en derecho adquirido, de litigar sin ecuanimidad ni capacidades suficientes en sustitución de los también disfuncionales tribunales de justicia.

Ejemplos para sustentar lo antes expresado abundan, sobre todo en las páginas de los diarios y en los segmentos radionoticiosos: la difícil pero necesaria racionalidad lógica detrás de buena parte de las transferencias interministeriales, el caso Rosenberg y la candidatura de Sandra Torres son tres de los casos que hubieran requerido más investigación y menos saña ideológica.

Un botón más que evidente apareció en el titular de portada del matutino Prensa Libre del pasado 19 de diciembre (reproducido semanas más tarde en el editorial de elPeriódico), según el cual “El 95.8% reprueba la gestión de Colom”. En realidad, el rotativo se limitó a circular la pregunta entre su público lector y a recoger y tabular las respuestas que éste le proporcionó vía telefónica; la cifra referida, por lo tanto, carece de rigor estadístico al no hallar sustento en una muestra representativa del universo poblacional del país.

“Creo que Álvaro Colom no tenía una idea completa del tamaño del poder de veto del principal poder económico y del vínculo cuasi umbilical de éste con la élite mediática”, comenta Hernández. Se trata, dice, de un poder meramente fáctico que contribuye claramente a la construcción del imaginario social de destrucción de la institucionalidad. La opinión pública, explica el escritor y humanista español José Luis Sampedro, no es un espejo del pensamiento reflexivo de la gente. Es, más bien, una opinión mediática, una opinión

creada por la educación y por los medios. “Y quien controla la educación y los medios es el poder económico”.

El efecto de ese poder de influencia en la percepción (e incluso en el comportamiento) de la ciudadanía constituye una paradoja que Berganza ha explicado en varios de sus textos de análisis: la gente reconoce el carácter tendencioso de los medios informativos pero aún así los consume y, más delicado todavía, es incapaz de advertir hasta qué punto y en qué medida su comprensión de la realidad se ve no sólo afectada sino manipulada por esos discursos, a menudo enlatados y difundidos de conformidad con intereses que no son los suyos.

La indagación aquí recopilada es, de hecho, prueba viviente y palpable en cierto grado de esa dinámica degenerativa que hace imposible establecer, en el terreno de la práctica, la línea divisoria exacta entre hechos y rumores, entre referencias precisas y datos alterados, entre información y desinformación.

* * *

El gobierno no llegaba todavía a la mitad de su mandato y ya daba muestras de fatiga y de desgaste propios más bien de su fase terminal. El Rosenbergazo debilitó la credibilidad del Ejecutivo en una proporción que bien cabría tildar de inmerecida, arrancándole además, de la noche a la mañana, el apoyo y beneplácito de las élites, que en su mayoría pasarían a declararle a partir de entonces una guerra abierta y sin tregua.

Se generó, también, un clima de polarización ideológica nada propicio para el avance de políticas de Estado necesitadas de anchos y sólidos consensos. Una de las víctimas más sensibles fue la malograda reforma fiscal.

Álvaro Colom veía cada vez más menguado su poder, cada vez más limitado su margen de maniobra, cada vez más agotados sus recursos políticos. ¿Habría sido capaz, a esas alturas, de intuir las nuevas embestidas que lo acechaban a la vuelta de la esquina, haciendo temblar aún más su ya titubeante conducción?

TERCERA PARTE

La decepción. El gobierno de la desesperanza

Mayo, 2009. El asesinato de Rodrigo Rosenberg y la conmoción causada por sus revelaciones póstumas, difundidas planetariamente a través de un video colgado en Youtube, tienen sumida a Guatemala en un clima de alta volatilidad política.

La institucionalidad del país está en jaque. Su futuro republicano pende de un hilo. Aires de generalizada incertidumbre flotan en el ambiente. El otrora ‘gobierno de la esperanza’, escaso de respaldo y falta de credibilidad, languidece al tenor de las adversas circunstancias.

Álvaro Colom se encuentra en el centro mismo de la vorá-

gine, señalado por Rosenberg de haberlo hecho matar. La élite capitalina, concentrada en la plaza central, exige su renuncia. De lo contrario –dicen los más severos– habrá que sacarlo a la fuerza. Resuenan ecos viscerales clamando por un golpe de Estado. La prensa local, borracha de sensacionalismo, no hace sino exacerbar aún más los ánimos, amplificando la confusión y el malestar ciudadanos.

Suena el teléfono de Roberto Ardón, director ejecutivo del CACIF. Atiende: es su amigo, el Presidente Colom. Llevan un buen tiempo sin hablarse (las agendas apretadas, la inercia, las diferencias inherentes al desempeño de sus respectivos cargos; todo ello restringe las opciones de comunicarse más a menudo), no obstante lo cual, y pese a la escabrosidad de saberse ubicados en extremos opuestos de la pugna del momento, consiguen ambos romper el hielo inicial y ceder al calor del afecto.

(Faltándole el respeto casi, la presentadora de CNN en español Patricia Janiot había dejado muy mal parado al gobernante días atrás, en una entrevista transmitida por todo el continente. En su programa televisivo, transmitido desde Miami al resto del mundo hispanohablante, el también presentador Jaime Bayly lo había tildado de ‘tontorrón’. Una parte de su propia familia –refiere Yuri Melini– le había dado la espalda, recriminándole el haber sido tan tibio en sus respuestas, tan ‘aguambado’ en su calidad de representante del pundonor nacional, tan falto de pantalones a la hora de salirle al paso a la adversidad).

“Lo conozco”, refiere Ardón, quien admite también haber sido amigo de Rosenberg. “Es un hombre sencillo y muy sentimental. No te voy a contar de qué hablamos porque son cosas personales, pero sí puedo decir que su llamada fue como un relámpago en medio de la tormenta. Me reveló a la persona detrás de la etiqueta que le da el cargo. Percibí

en él al amigo que quería conversar fuera de los protocolos políticos e institucionales. Hubiera querido recibir más de esas llamadas”.

¿Cuánta presión, cuántas dudas, cuánta angustia, cuánto temor habrá sufrido Colom en aquellos momentos? ¿Qué tan hondo fue su sentimiento de derrota y desamparo ante el rechazo casi unánime que le mostraba la opinión pública? ¿Qué tan solo y vacío de aliento se sentía (aun sabiéndose acompañado por su esposa y apoyado por su equipo de colaboradores cercanos) para decidirse a realizar aquella llamada?

* * *

La mayor fortaleza política de Álvaro Colom (su talante juicioso, reflexivo, medido, conciliatorio, con alta capacidad de negociación) fue también el motivo que lo llevó en varias ocasiones al borde de la ruina. “Es un gran manejador de crisis”, explica Ardón, haciendo referencia a cómo su carácter le permitió dismantelar muchas de ellas: aunque a ambos les tocó enfrentar esas coyunturas álgidas desde sectores divergentes en intereses, dice, él contribuyó a que la relación no se saliera de su cauce.

Pero “había siempre una impresión de no saber qué era lo que estaba acordando concretamente: o no se cumplía la palabra o se revisaban las decisiones”. Y eso, en política, es fatal, asegura. “Su corazoncito se conmovía”, refuerza Melini, “pero cambiaba de decisión de un momento a otro”.

En otras palabras, muy útil puede resultarle a un jefe de Estado el contar con recursos suficientes para torear las crisis que se le presentan, pero mucho más útil es saberlas anticipar; o, mejor aún, impedir.

La crisis Rosenberg, por ejemplo, aunque imposible de prever, ¿hubiera podido evitarse? Edgar Gutiérrez opina que Colom la sobrevivió de manera fortuita, por el involucramiento de la CICIIG, y porque la segunda ‘torre’ que buscaban derribar los sediciosos, el Banrural, resistió el embate gracias a su particular estructura de negocio. A criterio de Víctor Gálvez Borrell, decano de la facultad de ciencias políticas de la URL, el Rosenbergazo se inscribe dentro de un escenario de polarización notorio desde que el gobierno inició labores. “Cualquier suceso se aprovechó políticamente, como lo aprovechó el mismo Rosenberg al hacer su denuncia, y como lo aprovecharon los grupos que usaron su muerte como bandera de agitación golpista”.

En aquel suceso, recuerda Gustavo Berganza, un sector privado ya de por sí incómodo con Fuentes Knight y su esfuerzo por impulsar la reforma fiscal vio el impasse como una oportunidad en sintonía con el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras. “Y ahí”, destaca, “hay que reconocerle el mérito al canciller Haroldo Rodas, quien logró movilizar a la Organización de Estados Americanos y traer a José Miguel Insulza en muestra de apoyo al gobierno”.

Por otra parte, concluye Berganza, el escándalo sacude y pone en evidencia los negocios a la sombra del RENAP y Banrural, vinculados particularmente con Gregorio Valdés, financista de Colom. A decir de Ardón, “la crisis pudo haber generado la apertura de ventanas a ese mundo subrepticio de intereses, negocios, clientelismo, nombramientos y manejos financieros que no ocasionaron el problema pero que se hicieron visibles cuando surgió”. Lamentablemente la oportunidad fue desaprovechada, pero en cambio –dice, optimista– hoy tenemos mejores capacidades institucionales en materia de seguridad y justicia en buena medida gracias a

aquel remezón, que asimismo provocó un despertar de conciencia en muchos grupos sociales, y en consecuencia, “hoy tenemos mayores y mejores niveles de participación”.

Una participación traducida, sobre todo, en antagonismo puro y duro: a partir de entonces Colom encontraría aún más dificultades para gobernar (y aún menos poder para intentarlo), habida cuenta de una polarización magnificada como nunca antes en la historia ‘democrática’ del país. En opinión de Orlando Blanco, ex titular de la Secretaría de la Paz, al expresidente le faltaron arrestos para enfrentarse al poder económico. “Nunca lo confrontó, nunca se hicieron los cambios que se tenían que hacer, y a pesar de eso fue satanizado por ese sector”.

Los motivos que explican esa paradoja parecen encaminados a la figura que lo eclipsó a lo largo de todo su mandato: la temida y detestada Sandra Torres.

Matrimonio por conveniencia

Antes de conocer a Torres, Colom estuvo casado dos veces. De su primera esposa enviudó en 1977 debido a un accidente automovilístico. Su segundo matrimonio culminó en divorcio. Y también el tercero... pero eso ya es de sobra conocido gracias al culebrón que la prensa nacional nos fue ofreciendo por entregas en marzo del año pasado.

Nacida en Plancha de Piedra (hoy Melchor de Mencos), Petén, un lejano municipio fronterizo con Belice, Sandra Torres encarna el súmmum de todas las fobias latentes en la cultura hegemónica guatemalteca, tan conservadora y discriminatoria como hipócrita: mujer, pueblerina, de origen humilde, no muy favorecida físicamente, poco femenina además en sus rasgos de personalidad y, para colmo, “igualada y arribista”.

Ella, a su vez, aun siendo mujer ostentaba para sí buena par-

te de los rasgos que nuestra sociedad autoritaria y machista tiene por costumbre reservar exclusivamente a los varones: don de mando, carácter fuerte e impulsivo, modales parcos, hablar directo, exigente en sus demandas, perentoria en sus plazos, implacable en sus juicios, impetuosa en sus acciones, inflexible en sus decisiones.

Su vínculo con Álvaro Colom se dio, al menos en principio, por motivos de conveniencia. “Fue un matrimonio político”, explica Ricardo Barrientos, ex-viceministro de Finanzas. “En su momento se barajaron varios nombres dentro de la UNE para sellar alianza con ella”, revela. “Lo sé porque algunos de esos nombres son de amigos míos”. Ella necesitaba una pareja política y la encontró en Álvaro Colom, al mismo tiempo que él se benefició también del caudal político que la enjundiosa petenera traía consigo.

De hecho, ambos provenían de la industria textil: él tuvo una destacada trayectoria no sólo como empresario sino en su calidad de líder gremial, mientras que ella era propietaria de la maquila ‘Tejidos Shebla’. Divorciada también, y madre de cuatro hijos, conoció en 1999 a Colom, con quien contrajo segundas nupcias en febrero del 2003. En aquella época fungía como asesora personal, responsable de la financiación de la UNE, directora de la Coordinadora Nacional de Mujeres del partido y presidenta de la Fundación de la Esperanza, entidad dedicada al trabajo social.

Enrique Godoy, quien trabajó con Colom en FONAPAZ, da fe de lo mucho que le cambió el temperamento bajo el influjo de la mujer que algunos medios de prensa, en referencia despectiva a su capacidad de tejer alianzas, apodaron la Tarántula. ¿Cuál es la diferencia entre el Álvaro Colom de FONAPAZ y el Álvaro Colom posterior? “Sandra Torres”, responde. “Él tenía más conocimiento de la realidad nacional que ella, pero no lo usó”.

En cierta ocasión, refiere, llegó un grupo de personas a protestar a FONAPAZ. Bloquearon la quinta avenida de la zona nueve y ocuparon el patio de entrada. Colom no se afanó. Mandó a comprarles comida, les proporcionó pedazos de nylon cuando empezó a llover, les dijo que con medidas de ese tipo no iban a lograr nada con él y que, si querían diálogo, levantarán todo y se sentarán a platicar para ver cómo solucionar el problema. “Lo que él buscaba era siempre llegar a un consenso”, dice. “Sandra Torres lo absorbió, lo copó. Muchas cosas las hizo quedando bien con ella, en vez de hacer lo que tenía que hacer”.

No obstante, el mismo Godoy reconoce que cuando Torres tomaba el control de algo, se informaba, tomaba decisiones y daba órdenes. “No había tanta discusión, a diferencia de Álvaro, que trataba siempre de conciliar y consensuar antes de girar instrucciones. Son dos estilos muy diferentes de dirigir”.

La desmedida Sandrofobia

En el espacio específico dominado directamente por Sandra Torres imperaba la disciplina más estricta y fuertes ritmos de trabajo, pero a la Primera Dama le faltó proyectar con objetividad lo que en realidad estaba haciendo: “A través del clientelismo que estos programas permitían, se decía que ella iba a entronizarse en la presidencia, para entonces sí emprender el socialismo del siglo veintiuno”, asegura Gustavo Porras, secretario privado en tiempos de Álvaro Arzú. “Ella, y sobre todo sus ‘representativos’, hicieron más que suficiente para consolidar esta imagen, que muy probablemente le costó la inscripción como candidata y la victoria posible”.

Iduvina Hernández considera, en cambio, que el influjo de la doña fue sobredimensionado en su descalificación, a partir de una imagen que la mostraba como el enemigo público nú-

mero uno. “Hay un linchamiento político de tal calibre que impide identificar a plenitud dónde está la realidad y dónde el mito respecto de esta figura. En todo caso, la influencia que tuvo fue inversamente proporcional a la fortaleza de la gestión gubernamental, y sus programas se mantuvieron estables, constantes y con resultados concretos”, señala.

Hubo una marcada oposición política, económica y mediática desde la asunción del gobierno que se mantuvo durante todo su mandato, prosigue Hernández. “Apenas tres meses después de asumir funciones circuló un documento atribuido a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), en el cual se señalaba a Sandra Torres de controlar el gobierno y de haber sido miembro de la guerrilla”, recuerda. La batalla mediática, altamente subjetiva y discriminadora, realizada por grupos de poder hizo que la gestión de la Primera Dama se tornara en defensiva, destaca Claudia Samayoá. “Al final, Guatemala perdió en el proceso, ya que todas las fobias se activaron y el ciudadano común y pobre replicó el racismo y discriminación de la élite criolla”.

La oposición cerró filas ante las intenciones del gobierno de repetir en el poder, que en realidad son las de cualquier equipo una vez gana las elecciones. Se armó una estrategia de alto impacto en contra de la esposa del Presidente y de sus programas porque advertían el riesgo de que ella fuera la próxima en ganar, explica Gálvez Borrell. “Torres le exigió eficiencia al aparato público en el marco de la mediocre tecnocracia guatemalteca”, agrega, con lo cual consolidaba su imagen y preparaba su candidatura. “La campaña anticipada de ella y la contracampaña mediática opacaron lo que debió haber sido una política social eficientemente manejada, como el resto de las políticas. Cohesión Social no tenía por qué estar por encima ni por debajo de nada”.

Fueron, pues, las malogradas ambiciones proselitistas de Torres y el haberse aprovechado del aparato estatal para destacar su imagen y lanzar su candidatura (negada con lujo de dolo por ella, por el partido y por el gobierno hasta el último momento) los factores que, sumados a ese ancestral desprecio clasista típicamente chapín, explican la llamada Sandrofobia. Ella “secuestró” buena parte de la agenda de gobierno, apunta Carrera, haciendo que éste tuviera una lógica electoral, como si fuera un partido político, a pesar de requerir una lógica de gobierno. “Hubo también mucha corrupción, aunque no sé si más que en cualquier otro gobierno. Lo cierto es que se hizo muy poco para combatirla”, dice.

Mucha corrupción, sí, y escasas acciones encaminadas a combatirla; pero sobre todo –según se explica en el capítulo anterior– opacidad, ignorancia y desprecio por los procesos.

Las controvertidas transferencias de fondos entre ministerios...

En un contexto de asfixia fiscal (dominado además por el peso de una oposición ultraconservadora, renuente a cualquier política social que modificara las prioridades administrativas del Estado), la captación de fondos suficientes para que los programas de la Primera Dama pudieran cumplir sus ambiciosos objetivos de cobertura requería, inevitablemente, recurrir a las transferencias interministeriales, una figura legal, aunque severamente cuestionada.

Karin Slowing, titular de Segeplan durante el régimen de Colom, considera aceptable el mecanismo de las transferencias si éstas provienen de organismos con baja ejecución y se dirigen a otras que tienen necesidad de recursos porque así se balancea el desempeño total del presupuesto del Estado, pero advierte que se abusó del procedimiento en función de agendas de interés. Los traslados, sin embargo, se

dieron echando mano de fondos que no se usaban, explica Samayoa, señalando concretamente la atávica subejecución en Salud y Gobernación.

No obstante, y pese a ser legales, las transferencias fomentan también cierta canibalización institucional. El efecto de transferir recursos fue devastador para los ministerios, denuncia Edgar Gutiérrez, a la vez que boicoteó sus propios objetivos y formó una masa burocrática sin otro propósito que el activismo electoral.

... y las inveteradas transas

A muy pocos sorprende que entre los diputados sea cada vez más común el hecho de obtener ingresos adicionales no sólo de negocios legítimos (gasolineras, estaciones de radio y de televisión de cable local) sino ilegítimos (obras públicas ejecutadas a través de oenegés y constructoras) e incluso ilegales, como el narcotráfico. En general, los ingresos que cosechaban por la vía de las obras les permitían contar con suficientes recursos para financiar su campaña de reelección y volver permanente la inmunidad de la que gozaban por ser diputados, explica Fuentes Knight, lo cual garantizaba la impunidad y les permitía seguir involucrados en el ‘negocio’ de la política.

En varias ocasiones, las cámaras patronales se pronunciaron no sólo contra el desfinanciamiento y la pésima administración de Colom y de su equipo sino, sobre todo, contra la carencia de un plan claro de a dónde quería ir y qué era lo que había que hacer para llegar ahí.

Pero, ¿y qué había de aquel ambicioso Plan de la Esperanza cuyos alcances llegaban hasta el año 2032?

Orlando Blanco ofrece una no muy honrosa explicación: el programa de gobierno, dice, vino a ser algo así como una

carta de presentación ante la sociedad, no la brújula del que-hacer administrativo. “La misma composición del gabinete empezó a generar ciertas fisuras que con el tiempo se fueron ahondando”.

Uno puede contar con el mejor de los planes para gobernar, matiza Ronaldo Robles, exsecretario de Comunicación Social, “pero si no se tienen los votos en el Congreso, no sirve de nada; y si los diputados son instrumentalizados de acuerdo a fines e intereses de otros grupos, te topás contra la pared”. En efecto, las agendas de negocios que en el Legislativo se realizan impunemente y en alevosa contravención a las leyes y los intereses nacionales son prácticas consuetudinarias.

Hubo corrupción, subraya un empresario constructor, fenómeno que –aclara– viene de administraciones pasadas: “Ya desde antes había mucha intromisión de congresistas, y eso no sólo continuó sino que aumentó. Fueron obvias las asignaciones para obras a cargo de empresas de personas que tenían contactos con diputados, con miembros del partido oficial o con gente que sencillamente apoyaba los programas de Cohesión Social”.

Lo que tenían que hacer las empresas para ganar una licitación, explica, era conseguir un padrino: un diputado o un funcionario bien conectado. “Se aprobaron muchos contratos a través de las municipalidades, creció exponencialmente la cantidad de oenegés al verse que a través de ellas era fácil obtener fondos sin mayores controles, poniendo a alguien más que administrara y sacando cada quien su tajada”.

El ciclo de corrupción se intensificó durante el proceso de cabildeo en el que Gustavo Alejos consiguió que su hermano Roberto fuera nombrado Presidente del Legislativo. Ese cabildeo, explica Berganza, se basaba en repartir obras del ministerio de Comunicaciones entre los diputados que vota-

ran por él. “Lo político”, dice, “se resolvió con clientelismo y con transa”. La cartera, según cálculos de Blanco, terminó ejecutando unos 20 mil millones de quetzales, sin que ese gasto se haya visto reflejado en obras de infraestructura ni mejoras en la red vial.

Pero no sólo en Comunicaciones ni en el Congreso se vieron casos de tráfico de influencias. La prensa abundó en denuncias sobre cómo el espectro del clientelismo y la impunidad se esparció asimismo en casi todas las dependencias del Ejecutivo, desde Educación hasta Salud, pasando por Relaciones Exteriores, Ambiente y Recursos Naturales, Gobernación, Agricultura y Energía y Minas.

Durante el régimen de Colom se duplicó la ejecución de gasto público a través de fideicomisos, mecanismos opacos que, al ser administrados fuera del Estado (a través de un banco), no están sujetos a la ley de Contrataciones. De los contratos adjudicados por el gobierno, el 95 por ciento fueron sin licitar. “Las obras impulsadas en el Congreso, los bonos colocados en el mercado financiero, los bienes y servicios adquiridos por el Estado a empresarios nacionales, todos eran fuentes de ingresos importantes para un pequeño pero influyente grupo de empresarios, políticos y banqueros”, escribe Fuentes Knight.

Grandes fracasos: el desarrollo rural

Acaso el mayor fracaso del gobierno anterior haya sido el desarrollo rural: Colom prometió atender las necesidades del campo, que fue la región que le dio la victoria electoral, y no lo hizo. “Cuando uno mira el desfile de ministros en Agricultura”, comenta Barrientos (hubo cuatro nombramientos en menos de tres años), “se ve un proyecto de negocios empresarial ligado a la distribución de fertilizantes”, dice, en referencia a Disagro, propiedad de Roberto Dalton, quien

fue director de Programa Nacional de Desarrollo Rural (Pro-Rural) y financista de campaña.

El problema con el Ministerio de Agricultura, explica Barrientos, se remonta a los años noventa y se enmarca en el impacto que tuvo el llamado Consenso de Washington. “Desde hace veinte años, Guatemala se subió al tren de la reducción del Estado, especialmente en la política agraria. Con Álvaro Colom se advierte sólo la agudización de esta debacle estructural. El bastión de su oferta electoral, que era el desarrollo del agro, lo tuvo que ceder ante la agenda empresarial de los importadores de agroquímicos y distribuidores de fertilizantes. La plutocracia trabajando”.

Los altos índices de desnutrición son un claro indicador de lo poco que, históricamente, ha hecho el Estado guatemalteco para remontar el subdesarrollo, evidenciando una cultura finquera que, según Eugenio Incer (investigador de AVANCSO en el área de estudios sobre el campesinado), es racista o, en el mejor de los casos, paternalista. “Aquí el sector agrícola recibe el 8 por ciento de los préstamos que da el sistema bancario, siendo este un país que vive de la agricultura”, pondera.

De poco le sirvió al gobierno el haber establecido un Sistema Nacional de Diálogo Permanente, fustiga Incer, si al mismo tiempo fijaba una política de criminalización respecto de la búsqueda de oportunidades para salir de la pobreza. “Y es que, desde mi punto de vista, las ocupaciones son eso: una señal desesperada de comunidades que arriesgan toda su integridad física en ir a ocupar fincas que no están siendo utilizadas o producidas”.

De hecho, el gobierno de Álvaro Colom sobrepasó al de su antecesor, Óscar Berger, en número de desalojos efectuados (152 contra 127), traducidos en violencia estatal; además de

reducir su contribución en entrega de fincas. Lo que esto demuestra, dice Incer, es una clara dificultad para entender la dinámica de la pobreza en el campo, ya que, haciéndose llamar socialdemócratas, “aplicaron represión y ofrecieron una política pública mediocre y de muy baja ejecución”.

¿Hasta qué punto el dinero de los programas de asistencia están generando la posibilidad de un desarrollo sostenible y permanente?, se pregunta. Habría que ver la unidad familiar como un eje de la política pública, agrega, apoyándola con transferencias no necesariamente de dinero sino de semillas, de animales, de tierras, o de capacitación.

“Yo me sitúo en los pies de un niño del área rural y mi horizonte es terrible: o me muero de desnutrición, o consigo sobrevivir para convertirme en un proletario mal pagado trabajando en una plantación de café o de azúcar, o me voy de mojado. Esas son las posibilidades que el Estado guatemalteco le brinda a la mayoría de su población”.

Cabe aclarar que el incremento de desalojos tuvo que ver no tanto con políticas emanadas del Ejecutivo sino con órdenes judiciales, regatea Blanco, pese a que hubo, eso sí, violencia excesiva. Carlos Menocal, ministro de Gobernación saliente, se defiende: “Creo que no se ha entendido cómo funciona el proceso de judicialización de un caso. El gobierno no decide antojadizamente desalojar una finca. Lo ocurrido en el valle del Polochic, por ejemplo, fue una petición que hizo el Ministerio Público al juzgado de Alta Verapaz. Teníamos que actuar; de lo contrario, cometíamos desacato”.

Vulnerabilidad ambiental

La problemática ambiental no se considera una prioridad nacional porque, para empezar, no le interesa a la élite, explica Karin Slowing, y para colmo el ciudadano común es muy poco consciente de su relevancia. Destaca, sin embargo,

la labor de la cartera del ramo mientras estuvo a cargo del doctor Ferraté: utilizando fondos privativos (es decir, recursos no asignados por Finanzas sino generados por el mismo ministerio a través de la venta de servicios, como la elaboración de estudios de impacto ambiental) consiguió redactar y colocar catorce leyes en el Congreso. “Son marcos normativos y regulatorios que no se ven ni se sienten, pero revisten una gran importancia para el país”, expresa. Lamentablemente, las iniciativas siguen estacionadas en la agenda legislativa, víctimas de la indolencia de los llamados ‘padres de la patria’.

Existe una cantidad de estudios que muestran la relación entre el modelo productivo y su impacto ambiental, recalca Incer: “Tenemos suficiente evidencia para decir que es necesario hacerle un ajuste profundo al modelo productivo vigente”.

De hecho, el Perfil Ambiental de Guatemala 2008-2009, publicado por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la URL y titulado Las señales ambientales críticas y su relación con el desarrollo, arroja algunos indicadores que llaman la atención: “La tasa nacional de extracción de bienes naturales por unidad de superficie es de las más altas comparada con países de igual desarrollo económico”, concluye el estudio. “Por ello, deben buscarse mecanismos de crecimiento que no estén basados en extracciones de recursos. Actividades como el ecoturismo, que aprovechan los servicios ambientales generados por los ecosistemas, son una opción compatible”.

Qué mejor demostración de la pobreza del Estado y su incapacidad de proteger a la ciudadanía que los mal llamados ‘desastres naturales’. “Sabido que hay que planificar”, reprocha Melini, “no hay respuestas adecuadas bajo planes de gestión de riesgos”.

No debería extrañarnos, entonces, que Guatemala ocupe el segundo lugar mundial en vulnerabilidad por el cambio climático.

Las concesiones mineras...

Son muchos los problemas sistémicos cuyas causas sería injusto atribuir exclusivamente a la administración de Colom: la corrupción generalizada, el deterioro ambiental y la escasez de gasto público asignado al desarrollo rural, entre otros.

¿Y qué decir de los conflictos derivados de las operaciones que realizan las industrias extractivas? ¿Por qué, si se trata de un problema común a varios gobiernos, el peso de la saña recaerá de manera más acentuada en Colom y su equipo?

“Si te das cuenta”, observa Blanco, descargando de cierta responsabilidad al gobierno pasado, “no fueron muchos los contratos de exploración que otorgamos; pero el gobierno de Berger nos heredó más de doscientas licencias autorizadas. Y no querés saber el problema legal que implica derogar algo así. Ahí está Ferrovías para demostrarlo”.

A estas alturas parece evidente que la explicación está no sólo en las licencias autorizadas durante administraciones anteriores o en el boicot mediático que tuvo casi permanentemente en la picota al gobierno de Colom. Está sobre todo en la estafa que para la ciudadanía supuso constatar cómo, a juzgar por varias acciones concretas, el discurso socialdemócrata del expresidente fue mera cortina de humo.

No puede ser que en los últimos siete años hayan llegado 33 iniciativas al Congreso para modificar la ley de minería y ninguna haya avanzado más allá de la primera lectura, denuncia Melini. “Durante dos años, Alejandro Sinibaldi (hoy ministro de Comunicaciones) fue presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y nunca convocó a reu-

nión. Eso nos sugiere que el poder político está comprado por el poder económico a través de corrupción que no deja rastro”, dice. “Es obvio que Guatemala está cooptado por un poder económico compatible con las industrias extractivas y las transnacionales”.

Técnicamente la mina Marlin, operada por la firma Montana Exploradora en dos municipios de San Marcos, está haciendo lo que la ley le permite que haga. El problema, entonces, no es de la compañía sino del Congreso y su negligencia al no modificar la Ley de Minería con el propósito de incrementar los controles ambientales y el margen de regalías para el país; y eso, subraya Melini, permite sospechar que Montana ha estado financiando a los principales partidos políticos desde antes incluso de empezar sus operaciones.

Resulta curioso, por decir lo menos, que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó resolución sobre una medida cautelar previniendo la posible contaminación de la cuenca y la consecuente transgresión del derecho de las comunidades aledañas a gozar de un ambiente sano, Álvaro Colom se apresuró a salir en defensa de las actividades extractivas con el argumento de que éstas no contaminan.

¿Qué se hubiera podido hacer? Melini se apresura a contestar: regalías mineras a una tasa fija de no menos del 16 por ciento, una tasa fija del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 7.5 por ciento y la indexación del precio de las regalías al comportamiento de los mercados internacionales del oro. “De ser así”, asegura, “el pisto nos sobraría. Producir una onza de oro le cuesta a Goldcorp 134 dólares (incluyendo ISR, IETAPP, IVA, RSE, regalías mineras y todo lo demás) y la está facturando hasta a mil 730 dólares en el mercado internacional”.

Algunas decisiones administrativas de Colom hacen pensar

que se limitó a corresponder con algunas deudas de campaña. Por ejemplo, el hecho de nombrar, como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), a un abogado que había trabajado antes para el grupo TOMZA, S. A. (cuyo propietario, Tomás Zaragoza, fue su financista) nos habla, dice Melini, “de lo influenciable y manipulable que fue”.

Por su parte, desde el ministerio de Energía y Minas Carlos Meany impulsó las carboneras, permitió que siguiera la mina Marlin a pesar del incumplimiento de regulaciones, le dio luz verde a los rusos en El Estor y a los chinos en la explotación de arenas en el Pacífico. Todos esos intereses, teniendo en cuenta que quien le hablaba al oído a Colom era alguien tan orientado a los negocios como Gustavo Alejos, provocaron que la agenda ambiental fuera considerada como una piedra en el zapato, denuncia Melini.

El sector privado, recuerda Fuentes Knight, se mostró siempre propenso a dejar de lado lo social y lo rural para destacar, como medida prioritaria, la promoción de la minería, concibiéndola como fuente capaz de generarle al Estado recursos suficientes para que éste no se decantara a favor de una reforma tributaria. “Creo que el Presidente”, prosigue Fuentes, “consciente del carácter conflictivo de la minería, pero probablemente influenciado por su relación cercana con ciertos grupos empresariales, incluyendo al propio círculo de Carlos Meany, manifestó cierta ambivalencia no sólo en relación con la minería en un sentido amplio sino, más específicamente, en lo que se refiere a la renovación de un contrato de explotación petrolera situado en un área protegida en el Petén por parte de la empresa Perenco”.

... y la prórroga a la petrolera

El 22 de julio del 2010, en consejo de ministros, el Presiden-

te Colom firmó la extensión del contrato con la compañía francesa Perenco, el cual le permitía a ésta seguir realizando operaciones en el campo Xan durante quince años más. Finalizaba así un largo y controvertido proceso cuya gravedad se explica porque el mencionado campo, de donde proviene el 95 por ciento de la extracción petrolera guatemalteca, está ubicado en el corazón de la biosfera maya, concretamente en el área núcleo de la reserva natural más grande del país: la Laguna del Tigre, con una extensión similar a la de los departamentos de Sololá, Chimaltenango y Sacatepéquez juntos.

“No se trataba de cerrar el campo asumiendo posiciones ecológicas dogmáticas”, protesta Melini. “Eso hubiera sido técnica, jurídica, política y económicamente imposible”. En cambio, explica que el país hubiera ganado mucho más permitiendo que el contrato venciera para luego tomar posesión del campo petrolero, de las instalaciones, del oleoducto y de la refinería, para después licitar a nivel internacional un contrato de operación distinto. “Ahí hubo negocio”, asegura Melini, “y detrás de todo están las oligarquías: Álvaro Arzú, los Biguria, el G8. Las regalías de Perenco se quedan en el país, y eso puede comprobarse en las estadísticas económicas del Banco de Guatemala. Hubo colusión. Hasta Álvaro Colom tiene acciones ahí”.

Difícil de comprobar. Lo cierto es que, al día siguiente de firmado el contrato, el gobierno le entregaba la Orden del Quetzal a Michèle Ramis-Plum, embajadora de Francia en Guatemala. ¿Casualidad o causalidad?

Algunos escándalos de corrupción

Solel Boneh, la empresa israelí beneficiaria del contrato de la Franja Transversal del Norte, aseguró a su favor el voto mayoritario en el Hemiciclo mediante “transferencias con-

siderables” hechas a “un buen número” de congresistas, según le confió a Fuentes Knight “un diputado por encima de toda sospecha”. Por aparte, dice el ex ministro, la relación de amistad que Gustavo Alejos y Álvaro Colom sostenían con uno de los dueños de las empresas de telecomunicaciones permitió que entre los tres acordaran desistir del incremento tributario al sector telefónico “a cambio de un aporte que haría para la campaña electoral de la próxima candidata de la UNE”.

No serían esos los únicos dos casos de corrupción. La creación del Transurbano y el desempeño del RENAP estuvieron plagados de irregularidades, sin contar los procesos seguidos contra tres ex ministros de Gobernación: Francisco Jiménez, Salvador Gándara y Raúl Velásquez.

En junio del 2009 salió a luz el desvío de 82.8 millones de quetzales en ahorros del Congreso hacia la casa de bolsa Mercado de Futuro, operación avalada por el entonces presidente del Legislativo (integrante y fundador de la UNE) Eduardo Meyer. El diputado es acusado de peculado culposo, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes. Varios recursos legales presentados por sus abogados tienen estancado el proceso judicial. A todo esto, el dinero no ha aparecido.

También en 2009 el Ministerio Público abrió una investigación en contra de Óscar Comparini, presidente de la Corporación Financiera Nacional (CORFINA), por pagar a una socia de su bufete 595 mil quetzales a cambio de una escritura, y por vender a plazos dos hipotecas por 45 millones de quetzales estando valoradas en 70 millones.

Caso aparte, Obdulio Solórzano, exdirector de FONAPAZ, fue asesinado en julio del 2010. El MP lo investigaba por incumplimiento de contratos de oenegés que manejaban 440

millones de quetzales y por sobrevaloración de proyectos con otras veintidós oenegés por 93.7 millones de quetzales.

La lista sigue, por lo general sin evidencia suficiente para proceder a levantar cargos. Los trapos sucios de la administración anterior apenas empiezan a ver la luz, conforme se van realizando las auditorías respectivas a las distintas dependencias gubernamentales. Así, la Contraloría General de Cuentas presentó en días recientes cinco denuncias penales en el MP por malversación, abuso de autoridad, resoluciones que violan la Constitución y sobrevaloración contra el programa Mi Familia Progresá, el ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, FONAPAZ y el Tribunal Supremo Electoral.

Se le atribuye al MAGA el gasto de cien millones de quetzales en alimentos destinados para el programa Damnificados de la Tormenta Agatha y el volcán de Pacaya que luego trasladó al programa Bolsa Solidaria, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Esos movimientos –dice la nota de prensa– dejaron sin protección a cientos de familias afectadas como consecuencia de los fenómenos naturales ocurridos en el 2010.

Al igual que el MAGA, FONAPAZ utilizó de su presupuesto más de 113 millones de quetzales para la Bolsa Solidaria, de los cuales se destinaron 107 millones para la compra de alimentos, 4.2 millones en renta de vehículos y 1.7 millones en contratación de personal. Las denuncias contra el TSE, por su parte, se refieren a la sobrevaloración del papel adquirido y del pago excesivo por la impresión de las papeletas electorales para corporaciones municipales.

Con todo, para situar esta roñosa marea de impunidad en su debido contexto conviene recordar lo apuntado al inicio del primer episodio: en el transcurso del siglo pasado Guatemala

dejó de ser un Estado supuestamente liberal para convertirse en un Estado militar y por último en un Estado residual, raquítrico, debilitado por la influencia estadounidense en esta región del mundo que bien podríamos denominar su patio trasero, disminuido a fuerza de infiltraciones mafiosas desde antes de la refundación democrática de 1985, y desmantelado a fuerza de privatizaciones, emprendidas sobre todo durante la administración de Arzú.

En nuestro país, explica Edelberto Torres Rivas, el Ejército retuvo el poder, cedió la administración del Estado y siguió cometiendo delitos, vinculándose a los negocios de las drogas y el contrabando, iniciando el ensamblaje del crimen organizado. Y la administración, claro, también se corrompió ante la dejadez sordomuda de una población que, en la práctica, no entiende aún qué rayos es la democracia ni qué responsabilidades implica el hecho de asumirla como sistema de gobierno.

Los guatemaltecos estamos pagando muy cara nuestra incapacidad para trascender intereses particulares o gremiales, negándonos a dar el paso decisivo de pensarnos estratégicamente como un todo de cara al presente (un presente al que no es posible arrancarle el pasado que lo explica) y, en esa línea, sobre bases más anchas diseñar políticas a futuro con una lógica de nación. Más que un Estado fallido, Guatemala es una sociedad fallida, postula Torres Rivas. Un no-país.

Pocos procesos, durante la pasada administración, ponen tan en evidencia este amargo diagnóstico como el nudo de fuerzas y pugnas que dieron al traste con los reiterados intentos de reforma tributaria.

La malograda reforma fiscal

En un documento del Informe Estado de la Región sobre los mecanismos para la obstaculización de las reformas tri-

butarias en Guatemala se sugiere que las raíces de nuestra inveterada reticencia al pago de impuestos habría que rastrearlas en la oposición de los indígenas a los tributos durante la Colonia, pero sobre todo en la razón principal que tuvo la élite criolla en 1821 para independizarse de España: liberarse de sus obligaciones impositivas para con la Corona. En él, Richard Aitkenhead, comisionado presidencial de Óscar Berger y ministro de Finanzas de Serrano Elías, observa que el no pago de impuestos es parte de la cultura política nacional, y que ciertamente la oposición tiende a crecer entre los sectores más acomodados.

Se calcula que en el año 2006 el Estado guatemalteco dejó de percibir casi la mitad del total de la recaudación de impuestos registrados. En términos monetarios, la evasión del ISR de las empresas superó ese año los 1,400 millones de dólares. Aproximadamente dos de cada tres quetzales del ISR se evaden. Según Gustavo Porras, durante el 2007 el 48 por ciento de las empresas se declararon con pérdidas (es decir, no tributaron ni un centavo), mientras que el 52 por ciento restante declaró un 0.07 por ciento no de sus utilidades, sino de sus ingresos globales.

La reforma fiscal propuesta por Fuentes Knight y su equipo proponía modificar la ley de bancos y grupos financieros para que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) pudiera contar con información de contribuyentes individuales bajo garantía de confidencialidad. Contemplaba, también, transparentar la propiedad de las empresas privadas mediante la obligación de que todas las acciones tuvieran el nombre personal de sus propietarios. El empresariado, no obstante, alegaba que la opacidad era necesaria para evitar secuestros, justificando de esa manera su renuencia a cualquier medida que contribuyera a hacer más visibles sus operaciones.

Para colmo, Álvaro Colom se metió zancadilla a sí mismo al prometer en campaña que en su primer año de gobierno no haría nada en materia de reforma fiscal. Ello en desmedro de lo dicho en el discurso de toma de posesión, en el que manifestó sus intenciones de lograr una política fiscal “estable y responsable”. Algo “serio”, sostuvo.

Ese acuerdo no llegó nunca: bien dicen que, tratándose de impuestos, lo que no se hace en el primer año ya no se hace.

No había tampoco, dentro de la UNE, una conciencia o reconocimiento sobre la importancia del problema fiscal en Guatemala y sobre la necesidad de resolverlo, recuerda Fuentes Knight. Y, si la había, prefirieron no enfrentarla debidamente ante el costo político que hubiera podido representar.

Como era de preverse, los efectos de no haber impulsado la reforma fiscal con mayor vigor y convicción no se hicieron esperar: Guatemala contaba con reservas demasiado escasas para hacer frente a las dos crisis económicas (la primera, en 2008, derivada del incremento de los precios del petróleo; la segunda, un año después, resultado de la especulación financiera en los mercados inmobiliarios) y se mostraba impotente a la hora de encarar los daños provocados por los torrenciales chaparrones y las intensas sequías que año con año azotan al país, y que se suman al efecto de la penetración del crimen organizado, principalmente el narcotráfico.

Era el Congreso de la República el escenario donde confluían los sectores en pugna respecto de la reforma fiscal. Por un lado el Ejecutivo, por otro lado la élite empresarial encarnada en el CACIF y representada sobre todo a través de sus tentáculos en el Partido Patriota, principal bloque opositor; y en el medio algunos grupos supuestamente afines a la UNE, como los diputados de la Gran Alianza Nacional,

entre los que parecía haber malestar e insatisfacción “con las obras que se les habían asignado”, según refiere Fuentes Knight.

Pero el CACIF siempre quería dos tipos de garantías, dice. Primero, que se negociara con ellos antes de enviar la iniciativa al Congreso, y segundo, que la propuesta enviada no se modificara más. “¡Y todo ello sin rendirle cuentas a nadie!”.

En respuesta, Ardón comenta el “estilo particular” de Fuentes Knight, refiriéndose a él como “un buen técnico pero con algunas ideas demasiado rígidas que no le permitieron atender otras visiones del problema”. En suma, la credibilidad y la confianza se deterioraron muy pronto: “Llegaba al Congreso una propuesta de reforma que no había sido conversada con nosotros. Eso mina la comunicación y la confianza, aunque no haya obligación de hacer pasar todas las decisiones por esta puerta giratoria”, asegura.

Lo cierto es que la inoperancia del Legislativo favoreció a los actores empresariales. A pesar de que el Presidente había hablado de una ‘batalla’ y de que no se negociaría el contenido de la reforma fiscal, el temor a la confrontación pronto lo condujo a iniciar negociaciones con diversos actores. Los primeros contactos se realizaron con los representantes de las empresas de telecomunicaciones.

Juan Antonio Busto, quien presidía la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) a finales del 2009, comentó a la prensa: “No necesitamos un pacto fiscal; hay suficientes impuestos. Si se cobra a los que no se les está cobrando, se generaría una gran cantidad de ingresos para el fisco”.

Sus declaraciones se sumaban a la percepción de los representantes del CACIF cuando, en una reunión sostenida con Julissa Reynoso, secretaria de Estado Adjunta de los EE.UU., mencionaron que el gobierno era extremadamente corrupto

y que “Colom sólo había proporcionado promesas vacías a la fecha”, según se establece en un cable filtrado por Wikileaks.

Cuando Reynoso presionó al sector privado para que se centraran en encontrar soluciones prácticas, descargaron la culpa en Colom e indicaron que sin un socio creíble no podían lograr nada.

Reynoso presionó de nuevo, instando a la cúpula empresarial a asumir alguna responsabilidad contribuyendo a reducir las extremas brechas en la distribución de la riqueza en Guatemala.

En respuesta, señalaron que ellos pagaban el 89 por ciento de los impuestos del país (lo cual es falso si se toma en cuenta que sólo el IVA, pagado por todos los consumidores, representa alrededor de la mitad de los impuestos recaudados), mientras que las personas individuales contribuían con sólo el once por ciento restante.

Varios agregaron que los ricos no eran los únicos responsables de luchar contra la pobreza, y argumentaron que el gobierno necesitaba aumentar la competencia y atacar la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando —eximiéndose tácitamente de estas tres actividades, como si de hecho no estuvieran ellos mismos involucrados en dichas prácticas; y negándose a reconocer, además, que para frenar el contrabando se requiere una serie de controles en puertos y fronteras traducibles en altísimos costos que los empresarios se negaban a pagar.

Saldo amargo

La burguesía de este país será responsable de condenarlo al desastre por negarse a entender que, para los fines de su propia reproducción como clase, necesita un Estado mejorado, amonesta Gálvez Borrell. El anticomunismo, dice, ha

marcado el antiestatismo. “La desconfianza hacia todo lo que es público es de las mayores en América Latina. En esos términos, no podía esperarse mucho de la reforma de Fuentes Knight, quien además era identificado como hijo de un dirigente izquierdista”.

Tampoco hubo una unidad de mando de parte del gobierno, reconoce el mismo Fuentes Knight, y en cambio prevalecieron los enfoques equivocados frente a la oposición. “Ante el sector privado habíamos seguido una política que fluctuaba entre la confrontación y la conciliación”, menciona, “y a final de cuentas ésta última había predominado a tal extremo que había dado lugar a algo cercano a la claudicación”. Y remata: “El poder de veto del sector privado surge, al menos parcialmente, de la debilidad de los partidos políticos, que es en parte el resultado de su falta de independencia financiera”.

Guatemala tiene un sector privado ultraconservador, movido por el miedo, describe Barrientos. “Algunos abogados proempresariales me decían: ‘Lo que ustedes están proponiendo es razonable, es lo que el país necesita, pero en la Cámara nunca va a pasar’ ”.

Somos el país de América Latina que menos tributa sobre el PIB, recuerda Godoy. Le da risa, dice, la reacción de los representantes de la élite cuando traen al Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) y a la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) a sus grandes líderes de derecha, desde José María Aznar hasta Álvaro Uribe y Julio María Sanguinetti. “Todos ellos les dicen que tienen que pagar más impuestos, entre el 13 y el 16 por ciento del PIB, combatir la pobreza, generar más equidad en la sociedad. Pero se niegan terminantemente a hacerlo. La diferencia es que a ellos los aplauden y no se atreven a decirles que son comunistas o que son de izquierda”.

La reforma fiscal es una asignatura pendiente en la agenda de Guatemala, reconoce Ardón, cuya queja se centra en que el abordaje del gobierno fue el mismo de siempre: “Unidimensional, cortoplacista, dejando de lado aspectos como transparencia, calidad de gasto, control de la ejecución presupuestaria, etcétera. Querían ingresos, no reformas para el desarrollo”.

El fracaso de la reforma tributaria tiene nombre y apellido, postula Melini refiriéndose a Sandra Torres: “el sector privado percibía que estaban haciendo piñata con los recursos del Estado y que pretendían obtener financiamiento para seguir una estrategia política que ellos asociaban con Evo Morales y con Hugo Chávez; una propuesta reeleccionista con visión de largo plazo. Dijeron que iban a gobernar por treinta años, y estaban haciendo bases en áreas marginales y entre grupos vulnerables”.

Fuentes Knight tenía una noción casi mesiánica de su rol histórico y de su deber heredado en el mundo, pero con poca experiencia política previa para manejar uno de los desafíos cumbre del país, que ha ocasionado guerras y muchas muertes, comenta Slowing. Le faltó callo, dice; y le faltó con creces, para vérselas con un sector privado cuya carta corriente era ofrecer a puerta cerrada determinados planteamientos discursivos “que luego no tenían nada que ver con lo que hacían y decían públicamente”.

Este gobierno se vendió como extremadamente autónomo del poder económico y yo cuestiono que haya sido así, observa Carrera. “Fue débil frente a ese poder, lo cual se demuestra en que nunca pasó la reforma tributaria. Lo que molestaba era su discurso, porque sus acciones no fueron tan independientes, y eso rompe también el mito de que fue un gobierno inclinado al chavismo, enemigo del mercado, socialista del siglo veintiuno... Nada de eso. Yo lo calificaría de

socialdemócrata conservador”.

Conclusión con sabor a desesperanza

Cuatro años después de aquel hiperbólico discurso inaugural, ¿qué nos queda? Un racimo de promesas incumplidas y el tufo emanado de eslóganes gastados que hoy saben a estafa. “Las frases fueron negadas de manera rotunda y sistemática”, condena Gutiérrez.

Veamos.

¿El gobierno de la esperanza? “Esa fue la ilusión de Colom”, responde Godoy. “Pura retórica”, señala Incer. “Una oportunidad perdida”, zanja Ardón.

¿El gobierno de los pobres? Ardón contesta: “Siempre hay muchos que hablan en nombre de los pobres, mientras que ellos son los que menos hablan”. Y Melini repone: “Se utilizó la pobreza como mecanismo electorero”.

La justicia, las garantías sociales, el resarcimiento —expresó varias veces Colom a la hora de hacer entrega de obras— son una obligación del Estado para con su población más necesitada, no algo que la gente tiene por qué agradecer. Habría que reconocerle, al menos, el hecho de haber admitido en público una verdad que sus antecesores se negaban a ver. Que lo diga, si no, Óscar Berger: “Hagan el favor de desalojar el parque, pues dan mal aspecto al turismo y a la imagen del país internacionalmente; vayan a trabajar a las fincas, que en Guatemala hay trabajo para el que quiere”, fue su regaño a un grupo de manifestantes.

¿Un gobierno con rostro maya? “Tal vez por eso fue un gobierno sin rostro”, se mofa Gutiérrez. “Si hizo algo por los mayas no fue porque eran mayas sino porque eran pobres”, repone Carrera. Fue bonito ver la Bandera de los Pueblos en todas las instituciones, pero no hubo trascendencia, tercia

Blanco. “Como justificación se dijo que los programas sociales favorecieron principalmente a los indígenas, pero más allá de eso, quedamos cortos en materia de discriminación, eliminación de racismo y generación de nuevas relaciones interculturales”.

No se hizo nada por evitar el entrapamiento en la reasignación del canal 5 para la Academia de Lenguas Mayas. “La mejor evidencia de la marginación puede encontrarse en el presupuesto que el Estado asignó a todas las dependencias indígenas”, reclama Irmalicia Velásquez. Para el 2010 fue poco más de 52 millones de quetzales, cerca de una milésima parte del Presupuesto General de la Nación, que superaba los 49 millardos.

“El intento de reglamentar el proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas garantizada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, prosigue Velásquez, “buscó responder a intereses de exploración y explotación de empresas nacionales e internacionales”. La manipulación de Colom evidenció lo contradictorio de su discurso, de que sería un gobierno con rostro maya, señala.

¿La violencia se combate con inteligencia? Berganza: “no tuvieron la inteligencia de hacerlo desde el principio, y lamentablemente la inteligencia de Menocal tampoco llegó a tanto para no pelearse con Helen Mack, lo cual demoró el proceso de reforma policial”. Gálvez: “El gobierno no se dio cuenta de las altísimas expectativas que generó esa promesa como reacción humana a la mano dura militar. La seguridad fue la tumba de esta administración en sus pretensiones de hacerse reelegir, sobre todo en el voto urbano”. Ardón: “Me parece un buen consejo”.

Barrientos sueña con una Guatemala que ataque la violen-

cia como lo ha hecho Medellín: con educación, protección social y cultura. En cambio, dice, aquí “le quitamos el 15 por ciento de presupuesto a Cultura y Deportes y le aumentamos las asignaciones a la compra de armas, además de quitarles los controles de transparencia”. Esa no es inteligencia para combatir la violencia, se queja, no obstante admite que la ciudadanía “está desesperada y quiere ver sangre”.

¿Qué hubo del proyecto Cuatro Balam, aquel parque nacional que supuestamente integraría, protegería y estimularía los sitios arqueológicos de El Mirador y Tikal? ¿Qué hubo de la Ley de la Dignidad Humana? ¿Los 700 mil empleos? ¿Las 200 mil viviendas populares? ¿Qué hubo del Ministerio de la Familia? ¿El Plan de los Cien Días? ¿El Plan de la Esperanza? ¿El plan de choque sanitario? ¿El plan urgente de atención a la desnutrición infantil? ¿El Plan de Desarrollo Rural? ¿Las acciones medioambientales en prevención al impacto provocado por el cambio climático? ¿Su compromiso con los pueblos indígenas? ¿El cumplimiento “inquebrantable” de los Acuerdos de Paz y los derechos humanos? ¿Los ocho meses que pidió de plazo “para tener una seguridad estable”?

“En la práctica se aparentaban cambios para no cambiar”, observa Fuentes Knight dejando entrever cierta carga emocional no exenta de reclamo hacia el gobierno en el que se desempeñó, y sobre todo hacia su timonel, Álvaro Colom, cuya tibieza dejó sin frutos los esfuerzos —y las esperanzas— de muchos: “No había un empuje decisivo, presidencial o político-partidista”, escribe.

Fue “una larga noche oscura”, en palabras de Melini. “Mancharon y quemaron el nombre de la socialdemocracia. La clase política se desvirtuó como nunca. Los diputados salientes son tan depurables como los que había en tiempos de Serrano”.

“Yo creo que Colom, en su soledad, entiende muy bien este país, pero fue incapaz de dejarse guiar por esa visión”, observa Incer. Aunque sería injusto atribuírselo todo a él, dice, porque en su contra estuvo la élite económica “más conservadora, más intolerante y más intransigente” de toda América Latina. “La sociedad también es responsable, porque tenemos ciudadanos apáticos que generan gobiernos mediocres”.

Incluso las misiones cooperantes tienden a llevar sus anclas y marcharse a otras latitudes en las que sus programas de apoyo, financiados por ciudadanos que sí pagan impuestos, sean mejor aprovechados y no caigan en el saco roto de la ineficiencia, la corrupción y la desidia.

En la cancillería, según Gutiérrez, “la gestión que ahora termina provocó un daño institucional insospechado. Debilitó la columna vertebral de las misiones en el exterior y dañó la moral del funcionario mediante la invicta infección corrupta, sin precedentes en el Ministerio”.

Los cientos de millardos gastados durante la gestión de Colom “no se reflejan en nada”, se queja el Periódico en uno de sus editoriales. “Simplemente, no hay obra ni servicios públicos que justifiquen tanto gasto”; y criticaba a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y su decisión de despilfarrar 30 millones de quetzales adicionales en las dos últimas semanas del mandato.

De hecho, el exsecretario Ronaldo Robles ha sido denunciado recientemente en el MP por su sucesor en el cargo. “Nosotros partimos de un entorno mediático adverso”, recuerda Robles; lo cual, dice, justificaba una mayor inversión para contrarrestar en la opinión pública esos impactos cuya gravedad –sostiene– consistía no en que fueran negativos, sino en que estaban equivocados. “Quisimos utilizar nuestros propios medios de reproducción ideológica para promover

una transformación cultural de fondo”, defiende, “y quisimos invertir en equipo propio para evitar subcontrataciones onerosas”.

Como sea, no sólo la percepción generalizada sino las cifras duras apuntan a que se gastó más de lo que se tenía; lo cual, si se pondera templadamente, es lo que hace la mayoría de países (y familias) en tiempos de crisis. El resultado es una deuda de 3.8 millardos de quetzales en el ministerio de Co-

municaciones, 1.6 millardos en FONAPAZ, 201 millones en Gobernación, 73.9 millones en Educación y 13 millones en el ministerio de Salud, según datos proporcionados por el gabinete económico. El diario La Hora, en cambio, reporta una deuda en salud de 180 millones de quetzales por compra de medicamentos que no eran de prioridad para dicho ministerio, y un déficit del más del 50 por ciento en cobertura.

EPÍLOGO

A título, tal vez, demasiado personal

Entre la Guatemala de tarjeta postal (esa que, con sus recodos bucólicos en presurosas vías de extinción, sacamos a relucir cada vez que la mala conciencia agujijonea nuestra ya de por sí deteriorada autoestima) y la que nos embiste día con día en su vorágine de tribulaciones; entre la Guatemala que nos gusta evocar y la que nos resistimos a encarar; entre la balsámica mentira que enajena, no enaltece, y la convulsa realidad que nos escupe su veneno y sus fisuras; entre los extremos opuestos de este controvertido y contradictorio imaginario común de nación bullen las pulsiones que nos explican en toda nuestra aparatosa complejidad.

Somos el conflicto resultante de esas pulsiones en juego, a menudo autonegadas, operando siempre al amparo falso de normas que no se cumplen para unos del mismo modo que se aplican en otros. Somos el saldo, para empezar, de una

Constitución que no nos representa a todos. Somos herederos de un sistema económico excluyente y de una idiosincrasia discriminatoria, basada en la descalificación del otro: indio huevón, muco cholero, marero maldito, chonte ladrón, chafa mierda, culo fresa, canche hueco.

Venimos arrastrando, como carta de identidad cultural, un legajo frágil de mitos fatuos y momentos de dudosa ralea: la sangre de Tecún, el pecho del quetzal, un pedazo de cielo del que pende una nube su albura, el gol que Carlos Plata le metió de cabeza a Brasil, las ruinas de Tikal, el lago de Atitlán otrora sin rastros de caca y cianobacteria, la marca más vendida del oligopolio cervecero, nuestro gusto por el pollo frito caro, las cumbres domadas por Jaime Viñals, las consignas de GuateÁmala cayendo como nube de confeti, el triunfo de Carlos Peña y Fabiola Rodas en sendos montajes para exacerbar el consumismo, la fama de Arjona puesta al servicio de una guatemorfosis en clave de agua gaseosa.

Frente a nuestros ojos vendados fluye un caudaloso corredor de armas, cocaína y mano de obra barata, forzada a largarse de aquí pero sin visa para entrar allá. Bajo nuestros pies se pudren todavía los restos con señales de tortura de doscientos mil hombres, mujeres y niños, en su gran mayoría civiles desarmados, desechable carne de cañón, desoídas víctimas indirectas en una escabechina de sangre cuyo propósito era quitarle el agua a aquel temido pez que, por lo visto, sigue coleando.

Nuestra psiquis es como la de una niña que, tras ser violada reiteradas veces, bloquea el trauma ensayando tortuosos y desesperados mecanismos de defensa para no volverse loca y, al hacerlo, evidencia lo gravemente loca que está. Recomendamos (a veces con votos, a veces con consumo, a veces con pleitesía) a la recua de verdugos que tienen secuestrado nuestro derecho a una existencia libre, justa, sana y digna. El

síndrome de Estocolmo nos retrata de cuerpo y alma enteros.

No hay que creer ni dejar de creer, solemos pensar y decir los chapines. El miedo (que a veces es pavor), la desconfianza (que a veces es rechazo) y la indolencia (que a veces es parálisis) nos impulsan a querer quedar bien a la vez con dios y con el diablo. El sadismo más brutal convive dentro de nosotros amancebándose con la más tierna candidez. Somos una sociedad antisocial, un lienzo humano descosido por todos lados, un cuerpo colectivo con cuadro de esquizofrenia.

Por eso estamos como estamos. Y por eso, diría mi amigo el borracho, no tenemos el gobierno que merecemos; más bien, tenemos el gobierno que somos.

La evidencia es demoledora.

RECONOCIMIENTOS

El autor agradece el tiempo y la deferencia de las personas entrevistadas para la elaboración de este texto, en especial a Enrique Godoy, quien sin advertirlo sugirió el trazo general de la estructura narrativa.

Por último, un reconocimiento a Enrique Naveda, responsable de la edición, en gratitud por la acuciosidad mostrada en el desempeño de ese oficio suyo que ‘limpia, fija y da esplendor’.

